

---

HISTORIA  DE

---

# Colombia

---

Jorge  
Orlando Melo

---



EL COLEGIO DE MÉXICO



TURNER

*Título original:*  
*Historia mínima de Colombia*  
© Jorge Orlando Melo, 2017

*De esta edición:*  
© Turner Publicaciones S. L., 2017  
Diego de León, 30  
28006 Madrid  
[www.turnerlibros.com](http://www.turnerlibros.com)

DR © EL COLEGIO DE MÉXICO, A. C.  
Camino al Ajusco 20  
Pedregal de Santa Teresa  
10740 México, D. F.  
[www.colmex.mx](http://www.colmex.mx)

Primera edición: octubre de 2017

ISBN: 978-84-16714-07-0

*Diseño de la colección:*  
Sánchez / Lacasta

Depósito Legal: M-24919-2017  
Impreso en España

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:  
[turner@turnerlibros.com](mailto:turner@turnerlibros.com)

## ÍNDICE

Introducción	11
I Los primeros habitantes	19
Cazadores y recolectores (12000-3000 a.C.)	19
La agricultura	21
Cacicazgos y confederaciones (500 a.C.-1500 d.C.)	23
Los grupos principales	29
II La España del descubrimiento	35
III El descubrimiento del territorio colombiano y su explotación inicial: 1499-1550	39
La ocupación del interior y la creación de la Real Audiencia (1535-1550)	45
IV La Colonia: 1550-1810	53
La sujeción de los indios y la disminución de la población	53
La economía colonial	59
La minería y los ciclos del oro	67
La ciudad y el campo	70
Una sociedad jerárquica	73
La administración colonial: audiencia y cabildos	78
La defensa del reino	80
El establecimiento del virreinato y las reformas borbónicas	84
La ocupación del territorio y las regiones al final de la Colonia	92

<b>V La Independencia inesperada: 1810-1819</b>	<b>95</b>
El impacto de las revoluciones y la crisis española de 1808	95
Las juntas autónomas	98
Las primeras constituciones y la Independencia absoluta	109
Centralistas y federalistas	110
La reconquista	112
 <b>VI La República de Colombia: 1819-1830</b>	 <b>117</b>
La creación de Colombia y los problemas constitucionales	118
La liberación de los esclavos y la igualdad de los indios	122
La crisis de 1827, la convención de Ocaña y la dictadura de Bolívar	123
La disolución de Colombia	128
 <b>VII La Nueva Granada y la aparición de los partidos políticos</b>	 <b>131</b>
Los gobiernos de Santander, Márquez y Herrán	132
Un clima de cambio	135
La revolución del medio siglo	137
 <b>VIII La república federal</b>	 <b>147</b>
La crítica al modelo liberal de progreso	149
Los éxitos del liberalismo	152
La colonización	155
Las comunicaciones	158
La consolidación de la ciudad letrada	159
 <b>IX La república conservadora: 1886-1930</b>	 <b>167</b>
La Regeneración y los gobiernos conservadores	167
Auge cafetero y desarrollo industrial	179
El papel del Estado	182
Las reformas educativas	183

La agitación obrera	185
Paz y violencia	189
<b>x La república liberal: 1930-1946</b>	197
La revolución en marcha y la política de masas	201
El problema agrario	202
La pausa liberal	204
El segundo gobierno de Alfonso López	208
<b>xi Violencia y dictadura: 1946-1957</b>	213
El gobierno de Ospina Pérez y la violencia de partido	213
El gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta	217
La dictadura militar	221
<b>xii El Frente Nacional: 1957-1974</b>	231
Reformismo y parálisis	232
El gobierno de Valencia	236
La administración de Carlos Lleras: 1966-1970	238
Pastrana y el fin de la reforma agraria	243
Los efectos políticos del Frente Nacional y la guerrilla	244
El narcotráfico	248
<b>xiii El regreso a los gobiernos de partido: 1974-1986</b>	251
López y Turbay, y el auge guerrillero	251
El gobierno de Betancur: negociaciones y rupturas	255
Guerrilla y paramilitarismo: 1978-2002	259
<b>xiv Entre la violencia y la paz: 1986-2016</b>	265
El gobierno de César Gaviria, la Constitución y la búsqueda de la paz	268
Samper y Pastrana: cuestionamiento moral y negociaciones generosas	272
La reacción uribista	276
Santos: una nueva negociación de paz	278

<b>xv Los grandes cambios del siglo xx</b>	<b>283</b>
La urbanización acelerada	283
Salud y crecimiento de la población	286
La educación	289
La situación de la mujer	292
Los medios de comunicación	299
Viajes, cartas y llamadas	303
Diversiones y fiestas	306
El hogar y la calle	310
Arte y literatura	311
Hacia una sociedad laica	314
Ideas y creencias	317
A modo de conclusión: avances y problemas	321
Bibliografía mínima	325
Mapa 1. Grupos precolombinos y principales ciudades españolas, 1500-1570	12
Mapa 2. Divisiones territoriales y principales ciudades, 1950	166

## 9. LA REPÚBLICA CONSERVADORA: 1886-1930

### LA REGENERACIÓN Y LOS GOBIERNOS CONSERVADORES

Para ganar la guerra de 1885 Núñez entregó el control de la guardia nacional a generales conservadores, lo que indicaba a sus partidarios que estaba dispuesto a abandonar el barco liberal. Así ocurrió, y un Consejo de Delegatarios, formado en forma paritaria por conservadores y liberales “independientes”, escogido de hecho por el presidente Núñez, y que no dio ni un puesto a los liberales doctrinarios o radicales, lo eligió presidente para un período de seis años, de 1886 a 1892. Y aprobó una Constitución que eliminó el federalismo y dio al presidente el poder de nombrar a los gobernadores de los departamentos. Los derechos electorales se restringieron otra vez; los ciudadanos elegían en forma directa sólo concejos municipales y asambleas de departamento, y votaban por electores, que después elegían a los miembros de la Cámara de representantes y al presidente. Además, el derecho a votar en las elecciones nacionales se limitó por riqueza y alfabetismo. El gobierno controló las elecciones y entre 1886 y 1902 apenas dos liberales fueron elegidos a la Cámara y ni uno al Senado.

La Constitución de 1886 devolvió a la Iglesia el poder perdido, siguiendo la nueva convicción de Núñez sobre la importancia de la religión para el orden público, y puso la educación bajo la tutela de la Iglesia. Para reforzar el poder del presidente, recuperar el orden perdido y acabar con revoluciones y guerras civiles, extendió su período a seis años y le dio poderes extraordinarios —de “estado de sitio”— para suspender las leyes y dictar decretos con valor legal en casos de conmoción del orden público o guerra. Limitó los

poderes del Congreso y dispuso formas de elección de cortes y tribunales que garantizaban la influencia del gobierno. Eliminó el capítulo sobre derechos del hombre y el ciudadano —desaparecieron las libertades de expresión, imprenta, pensamiento y movimiento, aunque se mantuvo la libertad de prensa “en tiempo de paz” y se concedió a los no católicos el derecho a “no ser molestados” por sus creencias— y lo reemplazó con fórmulas que fijaban límites al poder estatal. En fin, se acogió la idea de Núñez de que “las repúblicas deben ser autoritarias, so pena de [...] permanente desorden” y se estableció un ejército nacional, que el presidente consideraba esencial para “fundar la paz”.

Este nuevo orden rigió más de cien años, hasta 1991, con algunas reformas y en forma limitada: los gobiernos declaraban el “estado de sitio” ante cualquier perturbación del orden interno y gobernaban con poderes extraordinarios, hostigando a la oposición, cerrando sus periódicos y confinando o desterrando los más visibles enemigos. El sistema fue centralista, religioso, autoritario, social y políticamente excluyente, rasgos que se suavizaron en 1910. En 1936 la concesión del voto a todos los varones adultos estuvo acompañada de otras reformas a la Constitución, que la hicieron aceptable para los liberales, sin quitarle sus rasgos más conservadores. De 1949 a 1958 se gobernó otra vez en “estado de sitio” y entre 1958 y 1991 también fueron frecuentes los periodos de suspensión de garantías constitucionales, aunque desde 1968 las reglas limitaban bastante la arbitrariedad del gobierno durante el estado de sitio.

La duración de esta Constitución —para 1991 era la más antigua de América después de la de Estados Unidos— muestra que, pese a sus excesos, era congruente con una nación en la que la Iglesia tenía gran influencia, los grupos dirigentes creían que para mantener el orden y evitar las guerras había que reforzar el poder del gobierno, y los grupos populares (campesinos, artesanos, peones y asalariados) carecían de organización propia y cuando participaban en política, fuera de protestas y revueltas breves y violentas, casi siempre se sumaban a grupos políticos orientados por grupos letrados.

Pero esta Constitución no resolvió el problema de los derechos de la oposición y al restringir la acción legal de los liberales hizo difícil pedirles respeto por las reglas de juego. La Constitución, en su



forma original, no trajo la paz sino la guerra, y hubo tantas guerras civiles nacionales durante su vigencia como bajo la de 1863, pero desde su reforma en 1910 sirvió de base para una convivencia tensa y difícil entre liberales y conservadores, en la que largos periodos de paz relativa se interrumpían por bruscas erupciones de violencia, como la de 1931 y 1932, que fortalecieron los odios "sectarios" de los partidos y prepararon el conflicto que se desató a partir de 1948.

Para mediados del siglo xx casi todos los colombianos eran miembros entusiastas de un partido, al cual pertenecían desde la adolescencia, siguiendo a padres y coterráneos: las familias tendían a ser de un solo partido y el matrimonio mixto era una pequeña tragedia. La mayoría de los pueblos eran liberales o conservadores, y el otro partido formaba pequeños enclaves en algunos barrios o veredas. En muchos sitios esto llevó a un patrón de residencia que enfrentaba a dos pueblos homogéneos, de diferente partido, separados por unas horas de camino. Cambiar de partido, "voltearse", era un acto de traición, cobardía o corrupción.

En cierto modo, la exasperación por la aplicación sesgada de la Constitución de 1863 por los liberales, su intento de someter la Iglesia a la autoridad civil, su manipulación de las elecciones, que hizo casi impensable entre 1863 y 1880 el triunfo de la oposición, llevó después de 1886 a un extremismo simétrico aún más duro. Mientras la Constitución de 1863 redujo la participación política efectiva de la mitad de la población (los conservadores tenían el poder en dos estados, Antioquia y Tolima, donde tampoco podían ganar los liberales, y una minoría asegurada en el Congreso, pero siempre minoría), la de 1886, escrita por el conservador Miguel Antonio Caro, buscó la unanimidad. Los liberales, al violar sus principios y no dar garantías a los conservadores, dieron razones para que estos, que no creían que el error tuviera derechos, limitaran a fondo su participación política. La intolerancia de la opinión contraria y la persecución policial a disidentes y opositores, apoyados en la visión escolástica y colonial de que existía la verdad en política y de que quienes no la compartían estaban en error o pecado, fueron parte esencial de la cultura colombiana hasta finales del siglo xx.

La Regeneración estuvo acompañada de la idea de que el sistema político debía corresponder a la esencia de la nación, definida

por sus valores tradicionales. Aunque a mediados de siglo algunos liberales habían planteado un “proyecto nacional” que incorporaba elementos populares o regionales, con la idea de que el mestizaje podía unificar los valores de todas las etnias, los grupos dirigentes identificaban la cultura con la tradición occidental. Para los ideólogos de la Regeneración el país debía reconocer como elementos centrales de la nacionalidad el catolicismo, los elementos hispánicos, el idioma español y las formas culturales propias de una sociedad jerárquica y respetuosa de la superioridad de los blancos. Estas visiones se mezclaban con los prejuicios étnicos y sociales de las clases altas pero chocaban con las diferencias culturales de regiones y grupos sociales, así como con la resistencia liberal a ver en la religión el elemento clave de la nación. Y chocaron en el siglo xx con la afirmación de elementos considerados “populares” y sin valor por los grupos altos, impulsados por sectores marginales o por intelectuales contestatarios, de modo que, al fin del siglo xx, resultó imposible definir una “cultura nacional” con rasgos compartidos por todos.

El presidente Rafael Núñez se fue a Cartagena y desde allí gobernó, dejando en manos de vicepresidentes o designados el manejo de la administración: sólo regresó para frenar debilidades o errores, como dar libertad de prensa a sus opositores o reabrir las posibilidades de autonomía regional, que antioqueños y caucanos de ambos partidos añoraban. Núñez fue reelegido en 1892 (y murió en 1894), y de nuevo dejó el poder en manos del vicepresidente, Miguel Antonio Caro, que gobernó con apoyo divino —“Dios lo hace todo”, decía— y con un Congreso casi unánime. Allí, el único representante liberal y un grupo de conservadores, que para diferenciarse del Partido Nacional en el que se habían unido los conservadores amigos de Caro (“nacionalistas”) y los liberales nuñistas se llamaron a sí mismos “históricos” y lanzaron un ruidoso manifiesto en enero de 1896, cuestionaron las emisiones clandestinas de moneda, las persecuciones a la prensa y el exilio de algunos políticos.

En 1898 se eligió a Manuel Antonio Sanclemente, un nacionalista de 84 años, con la vicepresidencia para el poeta y costumbrista José Manuel Marroquín, quien asumió el poder durante tres meses, bajó los impuestos al café y buscó una reforma electoral aceptable

para los liberales. Esto no era tolerable para los nacionalistas y Sanclemente asumió el cargo y gobernó desde un pueblo remoto, pues su salud le impedía subir a las alturas de Bogotá.

Durante los gobiernos de 1886 a 1898 el gobierno, para obtener recursos, creó un Banco Nacional al que dio el derecho de emitir billetes de curso forzoso. Su manejo fue descuidado o ilegal, pero la expansión monetaria para financiar el gasto público provocó una inflación interna que favoreció algo a los exportadores, ante todo a los cafeteros. Los regeneradores, que buscaban el apoyo de los artesanos, se declararon proteccionistas y defensores de las industrias nacientes, y algo avanzaron en estos años las industrias modernas, ante todo la cerveza, surgida en la década de 1870, y algunas procesadoras de alimentos, como chocolates y pastas.

La confianza en que el autoritarismo eliminaría las guerras, en que el país elegiría entre “regeneración o catástrofe”, resultó infundada: la supresión de los derechos a la oposición fortaleció las corrientes belicistas del liberalismo, minoritarias pero determinantes. En 1892 la convención liberal aprobó una línea ambigua, que combinaba la búsqueda de avances dentro de la ley con la autorización a los dirigentes para prepararse para la lucha armada, de obvios resultados: los actos de los belicistas traían la represión oficial arbitraria, que aumentaba la tentación de rebelión y servía para demostrar a los legalistas que era ingenuo esperar que el gobierno respetara los derechos liberales.

En este ambiente los más radicales se lanzaron en 1895 a una insurrección poco preparada y pronto derrotada. Cuatro años después el partido de gobierno estaba dividido: el presidente Caro encabezaba el sector intransigente, el Partido Nacional, que creía que el país debía borrar las ideas liberales de la cultura política, mientras los conservadores históricos buscaban una política flexible, menos centralista y con mejor trato a los liberales, con el apoyo de los empresarios cafeteros y comerciales y de otros moderados. Otra vez los belicistas liberales, convencidos de que no tendrían derechos electorales, se lanzaron a una guerra, muy larga —duró de octubre de 1899 a febrero de 1902— y de efectos catastróficos. Aunque algunos de los viejos dirigentes, como los ex presidentes Aquileo Parra, Felipe Pérez y Salvador Camacho Roldán eran par-

tidarios de esperar con paciencia la recuperación lenta de sus derechos, los más jóvenes, y muchos dirigentes de provincia, pensaban que la única salida era la guerra. El entusiasmo bélico se alimentó con la memoria de los derechos perdidos de estados y provincias y con el sentimiento popular, sobre todo en Cauca y la costa atlántica, de que los regeneradores rechazaban la participación del pueblo y de las castas de color.

En medio de la guerra, los conservadores "históricos" entraron en contacto con liberales legalistas para buscar que los rebeldes dejaran la guerra a cambio de una ley electoral que garantizara la limpieza del voto. El 31 de julio de 1900 los históricos, encabezados por el vicepresidente Marroquín, a quien se pensaba partidario del acuerdo, tomaron el poder. Pero nada se logró y la guerra siguió hasta 1902, cuando terminó con los Tratados de Neerlandia y Wisconsin: los liberales abandonaron las armas y recibieron amnistía plena y promesas de reformas.

En este largo conflicto se rompieron con frecuencia las reglas expresas o tácitas de guerra. Ambos bandos aplicaron tácticas crueles, maltratos y ejecuciones de prisioneros (aunque el guerrillero liberal Ramón Marín se negó a fusilar a los presos conservadores, pues si lo hacía, preguntó, "¿en qué está la diferencia?"), retaliaciones contra los civiles y otras conductas que, aunque presentes en todas las guerras desde la Independencia, habían sido rechazadas por los dirigentes políticos y no eran muy frecuentes. Esto dejó una herencia de odios y resentimientos mutuos que tuvo gran influencia en la política de las décadas siguientes.

Además, como resultado indirecto de la guerra, el departamento de Panamá se independizó en 1903, sin que Colombia tuviera forma de responder. Esta región se unió en 1822 a Colombia y tuvo una relación difícil y remota con las autoridades nacionales. El ferrocarril de Panamá, terminado en 1857, convirtió al istmo en la vía favorita entre el Atlántico y el Pacífico y reanimó el sueño de un canal entre los dos océanos. En 1879 Colombia autorizó a una compañía francesa a construirlo, pero ésta fracasó. Durante la Guerra de los Mil Días, Colombia y Estados Unidos negociaron un tratado, el Herrán-Hay, firmado en septiembre de 1902, que permitiría a los estadounidenses hacerlo. A fines de 1903 el Congreso colombiano,

preocupado por algunos artículos que limitaban la soberanía nacional en la zona del canal, lo rechazó, con lo que crecía el riesgo de un canal en Nicaragua. Esta decisión fue, para muchos panameños, otra prueba de los males del centralismo y de que dentro de Colombia no se respetarían sus derechos. Por ello, el 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró la Independencia, con el apoyo del gobierno de Theodore Roosevelt que, interesado en el canal y enojado por su rechazo en Colombia, prohibió el transporte de tropas colombianas por el ferrocarril y protegió la nueva nación. Se había logrado tener "regeneración y catástrofe".

El presidente elegido para el periodo 1904-1910, el general Rafael Reyes, estaba de acuerdo en que mientras Colombia siguiera dividida en dos tribus, hostiles e incapaces de cooperar, estaría sometida a riesgos como el que había llevado a la Independencia de Panamá. Desde que asumió el poder trató de lograr un acuerdo con los liberales y nombró dos ministros (de seis) de ese partido, los primeros en casi dos décadas. Ante el rechazo de algunos conservadores, impaciente y autoritario, Reyes pidió al Congreso poderes extraordinarios que éste le negó. Reyes aprovechó los rumores de conspiración de los descontentos conservadores para dar un golpe de Estado: cerró el Congreso y convocó en enero de 1905 a una Asamblea Constituyente, escogida por "Consejos de Gobierno" regionales presididos por el gobernador, lo que equivalía a que fuera nombrada por el presidente, que dio a los liberales la tercera parte de las curules y que lo primero que hizo fue extender el periodo presidencial, siempre que el presidente fuera Reyes, hasta 1914.

Reyes siguió nombrando ministros liberales, aunque nunca de guerra o gobierno. Este gesto dividió al Partido Conservador: muchos de sus jefes se oponían a cualquier concesión y otros estaban de acuerdo pero rechazaban su forma personalista y arbitraria. La irritación de los conservadores más exaltados llevó a un atentado contra el presidente en 1906, ante el cual el gobierno, además de fusilar a los que dispararon, respondió desterrando a zonas remotas a varios políticos y parlamentarios y censurando periódicos. Reyes perdió el apoyo de muchos reformistas y liberales que no creían en concesiones de un gobierno arbitrario, aunque no muy dictatorial,

y que había decidido quedarse en el poder hasta 1914. Otros, como el liberal antioqueño Rafael Uribe Uribe, colaboraron con el presidente hasta el final: al fin y al cabo era el primero que hacía concesiones serias a los liberales, que los dejaba respirar.

La Asamblea, que reemplazó al Congreso de 1905 a 1909, hizo otras reformas. La más importante no se puso en práctica porque no hubo elecciones hasta 1909, pero creó el modelo que se aplicaría de 1910 a 1930: la modificación del sistema electoral, ordenando que en toda elección donde hubiera tres o más curules (las de concejos y Congreso) el partido minoritario debía obtener parte de éstas.

El presidente, admirador del mexicano Porfirio Díaz, promovió el desarrollo económico, impulsando obras para el comercio internacional y protegiendo con medidas aduaneras algunas industrias, como las de textiles. El gobierno acompañó esta protección con subsidios en dinero a los empresarios, lo que produjo algunos resultados. Entre 1905 y 1909 hubo un ambiente económico favorable y el alza en los precios del café aumentó el comercio internacional y los ingresos públicos, descargados ahora del costo de la guerra.

El rechazo al autoritarismo de Reyes y a los negocios y privilegios de amigos y familiares del presidente fue aumentando entre 1906 y 1909 y se formó un grupo bipartidista que buscaba un régimen respetuoso de los derechos de las minorías. De este grupo, que se llamó "republicano", hacían parte conservadores históricos (a los cuales confirmó en su rechazo a Reyes la frecuencia con la cual iban a la cárcel los que firmaban manifiestos contra el gobierno), los liberales que se resistían a la arbitrariedad de Reyes o a sus intentos repetidos por manipular su sucesión, y sectores empresariales de Antioquia y otras regiones que creían que la convivencia crearía buen ambiente para el café y los negocios.

El presidente, además, promovió el tratado Cortés-Root, firmado en 1907 con Estados Unidos, en el que Colombia aceptaba la separación de Panamá y recibía una indemnización de 2.5 millones de dólares, y convocó en 1909 a la Asamblea Constituyente para que lo aprobara. Aunque la mayoría de la Asamblea, incluyendo liberales notables, lo aceptaba, hubo manifestaciones callejeras y discursos en contra, y el liberal Nicolás Esguerra esgrimió un argumento contundente: los tratados, según la Constitución, debían ser

aprobados por el Congreso, que no se reunía desde 1904. Reyes, sorprendido, se acomodó a la situación y después de una renuncia que no fue aceptada, le pidió a la Asamblea aplazar la discusión y convocó a elecciones de Congreso.

Las elecciones de mayo fueron ganadas en sitios claves, como Bogotá y Antioquia, por enemigos de Reyes. Ante el resultado, Reyes, que a pesar de su talante autoritario y personalista no quiso ser recordado como dictador, renunció y encargó de la presidencia al designado que había escogido, Jorge Holguín. El Congreso aceptó la renuncia y después de presionar la renuncia del designado, nombró en agosto al general Ramón González Valencia, el vicepresidente legal cuyo retiro forzó Reyes en 1905, para terminar el periodo hasta 1910. González Valencia, después del triunfo republicano en las elecciones municipales de noviembre, convocó a una nueva Asamblea Constituyente elegida por los concejos municipales que, a diferencia de las de 1863 y 1886, tuvo representación de ambos partidos: los conservadores históricos y nacionalistas, los liberales y los miembros de la alianza republicana.

La Asamblea Constituyente, en julio de 1910, después de asignarse la competencia para elegir presidente, escogió al librero, periodista y empresario antioqueño Carlos E. Restrepo, con el apoyo de la coalición "republicana", de conservadores moderados y liberales que seguían al general Benjamín Herrera. La Asamblea suavizó la Constitución de 1886, suprimió la pena de muerte y creó un mecanismo, de uso frecuente entre 1958 y 1991, que permitía a cualquier ciudadano demandar las leyes si creía que violaban la Constitución. Restableció la elección directa de los presidentes, aunque mantuvo las restricciones de alfabetismo y riqueza para votar por presidente o representantes. Redujo el periodo presidencial a cuatro años pero conservó su poder de nombrar gobernadores, que a su vez nombraban alcaldes municipales. Dejó así en pie el sistema creado en 1886 de gobiernos en los que, como se decía, hasta el último portero municipal dependía de la voluntad del presidente, y que llevaba a que todos los cargos públicos se entregaran en forma exclusiva al partido ganador. Pero en los cargos electivos adoptó el esquema de 1905: el sistema electoral debía garantizar la "representación proporcional de los partidos". Al reglamentar esta norma en

1910 se ordenó dar siempre un tercio de las curules al partido minoritario, que tendría así siempre una representación fuerte, aunque no proporcional, lo que le daba poder de negociación, sobre todo si el partido de gobierno se dividía. Esto llevó a que, con frecuencia, entre 1910 y 1930, el presidente nombrara, en ministerios distintos a guerra y gobierno, a liberales que le ayudaban a maniobrar contra los miembros discolos de su partido.

Este acuerdo fue exitoso: de 1910 a 1948 se vivió en relativa paz, con momentos de conflicto político agudo que produjeron incidentes de violencia rural, como en 1931-1932 y en 1947-1948. Los liberales renunciaron a la guerra civil, que frente a un ejército más fuerte y mejor entrenado estaba condenada a la derrota: cuando algunos nostálgicos de la guerra civil proponían llegar al poder por las armas, tenían que enfrentar los resultados aceptables de la colaboración y la posibilidad de que la guerra propiciara el retorno a una hegemonía conservadora, como pareció que podía pasar en 1929. Tenían un arreglo que les daba algo, aunque no los dejara satisfechos, y que en 1930, debido a la división conservadora, les permitió ganar la presidencia.

Pero el acuerdo dejaba vivos dos problemas: la distribución anticipada de curules reducía la importancia de un sistema electoral limpio y en todas las elecciones, sobre todo desde 1914, el fraude fue amplio: voto de analfabetos, pobres y otras personas sin derechos, exclusión de votantes legítimos del grupo opositor, presiones, recuentos engañosos ("el que escruta elige" era el lema de muchos jurados), interpretaciones forzadas de la ley para no dar curules a nuevas minorías u otorgar a disidencias conservadoras el cupo de las minorías. Además, era irritante el voto unánime de los religiosos y el casi unánime del ejército y la policía por el conservatismo, en mesas especiales. Los políticos se acostumbraron a elecciones que no eran confiables e invitaban al fraude y la violencia. Con 50% de analfabetismo y condiciones de riqueza que tal vez no cumplía ni 20% de la población, que hubiera tantos votantes en los comicios presidenciales como en los municipales, donde el voto era universal, indica lo rutinario del fraude. El otro problema era la burocracia homogénea, que convertía los puestos en premio a los servicios políticos de los copartidarios y hacía que el triunfo del



partido contrario fuera una trágica amenaza de desempleo para los empleados oficiales.

En 1914 fue elegido un conservador, otro exlibrero, José Vicente Concha. El republicano Nicolás Esguerra obtuvo una votación reducida, pues el Partido Liberal, encabezado por Rafael Uribe Uribe, apoyó a Concha. Meses después dos artesanos vinculados a grupos republicanos y obreros que ya no tenían contratos de trabajo en el Ministerio de Obras, ahora dirigido por un liberal, tomaron venganza enloquecida y mataron a hachazos a Uribe Uribe en la acera del Capitolio Nacional.

Concha fue reemplazado en 1918 por el conservador Marco Fidel Suárez, antiguo director de la Biblioteca Nacional. Nacido en la pobreza, su visión del mundo estaba marcada por un catolicismo tradicional, según el cual la solución de los problemas sociales debía hacerse mediante la caridad. Los liberales se abstuvieron en esta elección (un candidato disidente tuvo unos pocos votos), aunque muchos, como los liberales Benjamín Herrera y Alfonso López Pumarejo y los republicanos Eduardo Santos y Luis Eduardo Nieto Caballero, apoyaron a un conservador disidente, el poeta Guillermo Valencia.

Al terminar la Primera Guerra Mundial, que frenó algo el desarrollo económico, la relación de Colombia con el mundo había cambiado: el principal mercado no era ya Inglaterra, sino Estados Unidos, de donde venían los principales inversionistas extranjeros, que controlaban los cultivos de banano y querían invertir en petróleo. Suárez buscó la cercanía con Estados Unidos: *Respice polum*, mirar al norte, fue su consigna, en el latín que había aprendido en el seminario. Para ello había que restablecer relaciones diplomáticas, rotas desde la separación de Panamá: el tratado Urrutia-Thompson, firmado en 1914 para reemplazar al fallido Cortés-Root y aprobado por el Congreso de Colombia, que expresaba el “profundo pesar” de Estados Unidos por la separación de Panamá y prometía una “indemnización elevada”, esperaba su aprobación en aquel país. En 1921 el Congreso lo aprobó, con el apoyo del presidente Wilson y del lobby petrolero, pero quitando la cláusula del “profundo pesar”, vista por sus partidarios como una condena inaceptable a Theodore Roosevelt. Por este cambio el tratado tuvo que ser presentado de

nuevo al Congreso colombiano, donde, borrado el gesto de contrición, tenía pocas probabilidades de éxito.

El presidente Suárez, con un Partido Conservador dividido, había sido acusado, en ruidosos debates, de vender su sueldo a prestamistas y de pedir créditos personales a interesados en inversiones públicas. Para facilitar el acuerdo con Estados Unidos renunció en 1921 y asumió la presidencia José María González Valencia, quien nombró ministro de Relaciones Exteriores, para defender el tratado en el Congreso, a Enrique Olaya Herrera, periodista y político liberal, director desde hacía más de una década de *El Correo Nacional*, uno de los diarios más influyentes. A fin de año se aprobó el tratado y Colombia entró en la danza de la prosperidad: iba a recibir 25 millones de dólares como indemnización y con Estados Unidos como amigo podía buscar créditos en Wall Street en el animado ambiente de los "años locos".

El presidente para el siguiente periodo (1922-1926) fue el antioqueño Pedro Nel Ospina, hijo de Mariano Ospina Rodríguez, el presidente derrocado en 1861 por el general Tomás Cipriano de Mosquera. Aunque había dirigido revistas literarias como *El Montañés* y participado en las guerras civiles y la política nacional, pues fue ministro de Guerra en 1899 y en 1901, era visto como un exitoso empresario, que había participado en la fundación de varias industrias y tenía ganaderías, minas y cafetales.

Los liberales tuvieron buenos resultados en las elecciones de concejos y representantes de 1919 y 1922, y en 1921 ganaron la mayoría en las capitales departamentales, donde el fraude era más reducido. Por ello se animaron a participar por primera vez desde 1898 con un candidato presidencial propio, Benjamín Herrera, que perdió sobre todo por el voto rural y de pequeñas localidades: en muchos sitios el voto por Ospina fue superior al total de varones adultos. El evidente fraude hizo que el liberalismo se abstuviera otra vez en 1926, cuando fue elegido el abogado y profesor universitario Miguel Abadía Méndez, escogido, en un conservatismo dividido, por el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, quien reunió a los dos candidatos y prometió al otro, el general Alfredo Vásquez Cobo, su apoyo en 1930.

## AUGE CAFETERO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Las primeras tres décadas del siglo xx fueron de gran progreso económico, impulsado por las exportaciones de café. En Santander las haciendas se explotaban en *aparcería*: el dueño de la tierra cedía al cultivador un lote en el que éste sembraba café y entregaba parte de la cosecha. En Cundinamarca, donde las siembras crecieron mucho entre 1890 y 1900, los propietarios quisieron explotar directamente el cultivo. Como faltaba mano de obra, trataron de atar a los trabajadores a la tierra entregándoles parcelas en las que podían tener cultivos de pancoger pero no café, a cambio de trabajar en los cafetales del dueño.

Pero fueron las zonas de reciente colonización, en las vertientes del sur de Antioquia y otras regiones templadas, las que ofrecieron un ambiente más apropiado. Allí las grandes concesiones de tierras se hicieron en zonas planas y valles bajos que se volvieron haciendas ganaderas, mientras que los “colonos” recibían lotes pequeños y mediados en zonas quebradas. Estas propiedades, con una agricultura de subsistencia eficaz, sostenían a familias numerosas, que aportaban mano de obra, y tenían relaciones estrechas con tenderos y comerciantes. Entre 1890 y 1930 las zonas de colonización montañosa de Antioquia y Tolima, de Cauca y Valle se dedicaron febrilmente al cultivo del café y su producción pasó de 5% en 1890 a 60% del total en 1932 y de 6 000 sacos anuales a más de 2 200 000. Esta expansión fue muy rápida entre 1900 y 1914, y combinó cultivos de todos los tamaños: para 1932, 60% de la producción del país se hacía en unos 150 000 cultivos de menos de doce hectáreas, mientras 40% correspondía a 4 000 cafeteros que trabajaban con aparceros o peones en cafetales de doce a cien hectáreas.

El café dependía de una atención cuidadosa y de un comercio eficiente. Estimuló innovaciones mecánicas menores, como despulpadoras, trilladoras y secadoras, casi los únicos inventos nacionales que se usaron en todo el siglo. Los comerciantes y grandes cultivadores compraban la cosecha y la llevaban a las ciudades desde donde se exportaba, con un nombre de origen: “Medellín Excelso” o “Manizales”. Los grandes exportadores, con representantes en Eu-

ropa o Estados Unidos, hacían las ventas finales y se quedaban con la mayor parte de las utilidades.

De este modo el café enriqueció a comerciantes e intermediarios, arrieros y transportadores, trilladores, comisionistas y exportadores. Al mismo tiempo dio ingreso monetario a pequeños propietarios y creó empleo asalariado, en épocas de cosecha, para hombres y mujeres. La trilla del grano, que se hacía en pequeñas "fábricas", fue, en las primeras tres décadas del siglo, la principal empleadora de trabajadores en las ciudades de la región: las escogedoras y trilladoras eran casi siempre mujeres.

Al distribuir los ingresos entre una población numerosa y dispersa, a diferencia del tabaco, donde se concentraron más, amplió el mercado de las industrias nacientes. Muchos campesinos se convirtieron en consumidores de bienes industriales, lo que estimuló la producción local de bienes, como cerveza, gaseosas, chocolate y cigarrillo, telas, vajillas, muebles metálicos y herramientas sencillas. Las industrias ofrecieron trabajo asalariado en las ciudades; en los primeros años, sobre todo en Medellín, la mayoría de los trabajadores fueron mujeres. Las textileras crearon hogares para que éstas vivieran en un ambiente apropiado, tratando, con apoyo de sacerdotes, de tener una clase obrera disciplinada y de contribuir a su moralidad. Este paternalismo fue uno de los rasgos iniciales de la industria antioqueña.

La producción dispersa estimuló los esfuerzos por asociar a los cafeteros, ligados a ambos partidos. Rafael Uribe Uribe y Mariano Ospina Rodríguez escribieron folletos para promover el cultivo y buscaron asociar a los cultivadores. Desde 1871 existía la Sociedad de Agricultores de Colombia, y en 1920 los cafeteros reunieron su primer congreso y formaron una federación en 1927, en un momento de altos precios y optimismo por una industria a la que veían gran futuro, aunque algunos riesgos, sobre todo por la agitación rural. Un año después, la Federación de Cafeteros firmó con el gobierno un contrato para administrar el impuesto a las exportaciones creado en 1927.

Al crear la Federación, los grandes cafeteros de Cundinamarca unieron sus esfuerzos a los de Antioquia. Aquéllos enfrentaban problemas por la escasez de asalariados, muy fuerte durante años de

ampliación del empleo en obras públicas y ciudades, y por las difíciles relaciones con agregados, aparceros y arrendatarios. En Antioquia, los dirigentes, aunque tenían cafetales extensos, encontraron en el ideal de la pequeña propiedad una respuesta al riesgo de un campesinado revolucionario que aparecía en las zonas del oriente. Esta posición fue compartida por el gobierno nacional, algunos de cuyos funcionarios recomendaron al mismo tiempo la prohibición de propaganda comunista y la distribución de grandes haciendas y baldíos a pequeños cultivadores. La Federación se presentó como vocera de una industria cafetera con gran participación de pequeños propietarios, sin confrontaciones graves entre propietarios, aparceros, arrendatarios o cosecheros. El éxito de esta ideología contribuyó a la relativa tranquilidad rural del occidente entre 1930 y 1960, rota por los conflictos partidistas desde 1949, pero más o menos aislada de los enfrentamientos sociales de otras regiones.

En estos primeros años estuvieron cerca de la Federación el ex presidente Carlos E. Restrepo y el empresario cafetero Mariano Ospina Pérez, quien la dirigió en los primeros años. La crisis de 1929, que trajo una brusca caída de los precios y de las exportaciones, le dio una tarea a la Federación, que usó el impuesto a las exportaciones para crear almacenes de depósito, impulsar cooperativas y promover los cultivos y su comercialización. El éxito de la Federación la convirtió en el mayor grupo de presión al gobierno: su influencia se manifestó en la orientación del Banco de la República y en el predominio de políticas cambiarias y de comercio exterior liberales. En cierto modo, los grandes dirigentes cafeteros, propietarios o exportadores, establecían sus acuerdos en la Federación y el gobierno solía seguir sus puntos de vista.

El país, que había estado más bien aislado del mundo en su vida diaria, terminó, por la expansión de su comercio exterior, afectado por las condiciones económicas internacionales. Como lo mostró Diego Monsalve en un gráfico ingenioso de 1927, hasta los matrimonios en Antioquia y la tasa de natalidad aumentaban o bajaban según el movimiento del precio del café en Nueva York.

Colombia, durante el siglo xx, tuvo un desarrollo económico continuo y elevado, al menos comparado con otros países de la región, como Brasil o México: en promedio creció a más de 4%

anual durante todo el siglo. Los únicos años en los que la economía decreció fueron 1930-1931 y 1998-1999, y en estas ocasiones la recuperación fue rápida. De 1905 a 1929 el gran impulso provino del auge cafetero y amplió las importaciones, con un débil pero constante crecimiento de la industria local. Se apoyó también en exportaciones menores, como esmeraldas, oro, banano y petróleo, que creció en manos de empresas extranjeras hasta 1951, cuando el gobierno, presionado por los sindicatos, creó una empresa pública, Ecopetrol.

La crisis de 1929 ofreció oportunidades de sustitución de importaciones a las industrias locales, que habían comenzado a crecer sobre todo en Medellín y Bogotá, y los años de 1931 a 1957 fueron de desarrollo de la industria local, que se convirtió en el sector más dinámico de la economía y llegó a representar 23% del producto nacional hacia 1975, mientras la agricultura perdía importancia. Desde los años ochenta la industria y el café perdieron fuerza, pero la exportación de productos mineros, petróleo y carbón, sostuvo el crecimiento hasta hoy, aunque con graves problemas ambientales. En todo caso, el impacto de la industria, la minería industrial, la agricultura de plantación y, sobre todo, de los servicios sobre el empleo fue grande y el trabajo independiente fue sustituido por relaciones salariales capitalistas: si en 1918 apenas 32% de los trabajadores eran asalariados, este porcentaje había subido a 62% en 1984.

#### EL PAPEL DEL ESTADO

El tamaño del Estado también se alteró: mientras que en el siglo XIX sus ingresos apenas le permitían pagar a los funcionarios y dar apoyo tímido a vías de comunicación y escuelas, a partir de 1922 la inversión pública adquirió importancia. Desde 1918 se logró tener al fin un "impuesto a la renta", establecido por el gobierno conservador, cobrado a los ingresos elevados y que en 1927 se trató de convertir en palanca de "justicia social", al fijarle tasas progresivas más altas a los ricos. El impuesto predial, aplicado desde 1908 pero con tarifas rurales muy bajas, fue el principal ingreso de las ciuda-

des grandes e intermedias. El Estado seguía dependiendo de los impuestos al comercio, sobre todo aduaneros, que crecieron mucho, y de monopolios e impuestos al consumo, en especial al tabaco y al alcohol que, cedidos a departamentos y municipios, financiaban el sistema escolar.

La inversión pública se concentró en las comunicaciones, financiada en parte con la indemnización por Panamá y con crédito externo. La red de ferrocarriles se multiplicó por tres entre 1914 y 1934 y apoyó la expansión cafetera, pero se estancó en los años siguientes, con excepción del ferrocarril de Bogotá y la costa atlántica, inaugurado en 1958. A partir de 1930 la prioridad se dio a vías asfaltadas que unieran las principales ciudades. Pero las carreteras eran malas, lo que explica el desarrollo temprano de la aviación, que empezó en 1919 y para 1930 unía las principales ciudades. Bogotá y Medellín, las dos ciudades más grandes, apenas tuvieron carretera directa a mediados de los sesenta y la comunicación por tierra de éstas con la costa atlántica se logró también en esos años.

#### LAS REFORMAS EDUCATIVAS

El esfuerzo liberal por convertir al maestro en contraparte civil y avanzada del cura se frenó hacia 1880. Los gobiernos de la Regeneración, sin embargo, promovieron escuelas y colegios, aunque con mayor vigilancia a la ortodoxia de los maestros. A partir de 1887 se impulsó la educación privada, con órdenes religiosas que vinieron a educar a mujeres de clase alta o se especializaron, como los jesuitas, en colegios para los grupos pudientes que buscaban educación religiosa; una línea similar siguieron los colegios de franciscanos y hermanos maristas. Los Hermanos de La Salle, que llegaron en 1893, abrieron también escuelas técnicas y artesanales. Algo similar hicieron los salesianos, que enseñaban mecánica, carpintería o tipografía.

Mientras tanto, las escuelas elementales para el pueblo se sostenían con recursos públicos. En 1903 se organizó el sistema y desde entonces los municipios y departamentos asumieron el manejo de la escuela primaria. Ésta creció con rapidez: a pesar de que

la población en edad escolar se multiplicó casi por diez, para 1980 los niños iban en promedio cinco años a la escuela, mientras que en las ciudades la asistencia era de nueve años.

La secundaria, en ciudades intermedias y grandes, quedó en manos de colegios privados, usualmente religiosos, aunque educadores liberales abrieron instituciones privadas para los que no querían educación confesional. En Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, el gobierno estableció colegios nacionales de secundaria para varones, que ofrecían educación de calidad, preparaban para el ingreso a la universidad y fueron canal de ascenso para los hijos de artesanos, maestros y otros grupos de clase media.

Aunque Núñez había ordenado abrir un colegio femenino público en Bogotá y anunció que vendrían profesoras del exterior para enseñar a cocinar y lavar, la educación femenina se limitaba a la primaria y a algunos colegios privados y religiosos. En los veinte hubo colegios femeninos nacionales, pero todavía no otorgaban el título de bachillerato a las mujeres.

Aunque los niños aprendían de memoria lo que dictaban los profesores (y el maestro “dictaba” clase, que el alumno copiaba en sus cuadernos, desde que hubo cuadernos) éstos conocían las teorías pedagógicas de moda, de Pestalozzi a Decroly, y sabían que debían evitar la enseñanza memorística y desarrollar las capacidades del niño de aprender e investigar. A partir de 1914 estas corrientes trajeron la “escuela nueva” y abrieron colegios innovadores, que aplicaron algo de las teorías.

Para buscar una educación más eficiente, el gobierno contrató una misión alemana que vino en 1922 y, aunque sus propuestas nunca se aprobaron, de ellas surgió en 1929 la primera facultad de educación en Tunja, trasladada después a Bogotá y convertida en la Escuela Normal Superior. Los colegios públicos se apoyaron en docentes de alta calidad formados entre 1935 y 1950 por la Escuela Normal Superior y sus antecedentes, cuyos licenciados eran científicos y educadores bien formados, que transformaron la enseñanza de las ciencias naturales y sociales en los grandes colegios y en las universidades.

La Universidad Nacional, creada en 1867, y la de Antioquia y la del Cauca, fueron las principales universidades públicas. Las



universidades se multiplicaron por los conflictos ideológicos. Para combatir el liberalismo, la Iglesia fundó en 1884 la Universidad Católica en Bogotá, de corta vida. Los liberales abrieron en 1886 el Externado de Derecho y en 1890 la Universidad Republicana, transformada en Universidad Libre en 1923. En Medellín los católicos crearon, en 1936, la Universidad Pontificia Bolivariana, en los mismos años en los que la Universidad Javeriana revivía en Bogotá en manos de los jesuitas, y en 1949 los profesores liberales retirados de la universidad oficial fundaron la Universidad de Medellín.

En la universidad se preparaban abogados, médicos e ingenieros, a veces con énfasis especiales: la Escuela de Minas de Medellín, abierta en 1887, subrayó la formación práctica y enseñó a los ingenieros los principios de la administración; muchos de los fundadores de las grandes empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo xx estudiaron en esta escuela.

#### LA AGITACIÓN OBRERA

Las industrias crearon un sector obrero cuyo crecimiento preocupaba a dirigentes conservadores y religiosos, por los riesgos para la moral y el orden. Existía una tradición de organización artesanal combativa y los conflictos entre artesanos y autoridades habían llevado a motines y desórdenes: los dirigentes artesanales generalmente combinaban una defensa decidida del proteccionismo con ideas variadas acerca del sindicalismo, el socialismo y la participación política de los obreros.

Durante las dos primeras décadas del siglo la clase obrera industrial era reducida y en algunas ramas, como la textil, predominaban las mujeres. Por ello, los esfuerzos de sindicalización fueron ante todo de artesanos y trabajadores de obras públicas y comunicaciones, en el río Magdalena o los puertos. Obreros y artesanos, ayudados por jóvenes liberales, fundaron en 1909 la Unión Industrial y Obrera, que creó en 1910 un Partido Obrero. En 1910 la Iglesia, siguiendo las ideas del papa León XIII, creó la Acción Social, para acercarse a estos grupos y alejarlos de las doctrinas socialistas. En 1913 se creó la Unión Obrera de Colombia y otra vez en 1916

un Partido Obrero, refundado en 1919, cuando se celebró la fiesta del trabajo del Primero de Mayo. Estos partidos participaron en las elecciones, casi siempre aliados con liberales o republicanos, aunque a veces fueron solos y tuvieron resultados prometedores.

Estos grupos, aunque pequeños, ayudaron a formar la ideología política de amplios sectores. Un abanico izquierdista se constituyó al menos desde 1918, integrado por organizaciones sociales, disidencias políticas liberales y nuevos partidos. Su visión iba desde la defensa de los derechos de organización y de las condiciones de vida de los obreros, acompañada de la idea de que el Estado tenía un papel central en el logro de una sociedad más justa, hasta la convicción de que había que hacer, siguiendo el ejemplo ruso, una revolución armada. Los primeros creían que el Estado debía gravar ingresos y propiedades grandes, apoyar la educación, distribuir baldíos o grandes propiedades a los campesinos, proteger a los trabajadores y reconocer los derechos a la organización y la negociación colectiva de obreros y campesinos. Este grupo reformista, fuerte en la izquierda liberal, pero también en quienes creían que las burguesías liberales podían ayudar a destruir un sistema social que creían feudal, esperaba un avance gradual, y confiaba en el apoyo de la mayoría de los dirigentes liberales y de algunos empresarios y conservadores. Los segundos partían de la necesidad de un cambio revolucionario: el país estaba sometido al imperialismo y sus clases dirigentes se opondrían a todo cambio substancial, que sólo podría lograrse mediante la lucha de los explotados, bajo la dirección proletaria y con apoyo campesino.

La realidad no confirmó las esperanzas de cambio radical: los campesinos, en su gran mayoría, no respaldaban la revolución, y los grupos obreros eran pequeños y poco organizados. Los socialistas, cuando lograban el apoyo de unos miles de obreros o campesinos, sentían que el pueblo estaba con ellos y que podrían guiarlos a la revolución y ante las dudas sobre la conveniencia de desafiar la ley, solían descalificar todo cálculo de oportunidad como gesto de cobardía, pues los revolucionarios tenían la obligación de luchar incluso si iban a ser derrotados.

Entre 1910 y 1922 fueron cada vez más frecuentes las huelgas, buscando mejoras en las condiciones de trabajo. La respuesta del

gobierno osciló entre la represión al anarquismo y el comunismo con los que identificaba al obrerismo, y el paternalismo para regular los conflictos y evitar que se radicalizaran. Para ello expidió en 1920 una ley que permitió las huelgas, pero sometidas a condiciones rígidas y etapas obligatorias de negociación, mientras los patronos conservaban el derecho a contratar trabajadores durante la huelga, lo que estimulaba la violencia.

Las huelgas más visibles fueron la de Fabricato en 1921, insólita por estar organizada por mujeres y por ser en una empresa industrial, las de la Tropical Oil en 1924 y 1927, y las huelgas contra la United Fruit Company: estas últimas se apoyaron en el creciente nacionalismo contra los empresarios "yanquis". A fines de la década los obreros lograron gran visibilidad social y política con su campaña por la jornada laboral de ocho horas, encabezada por Raúl Mahecha y María Cano.

En el sector rural las movilizaciones, fuera de las rebeliones indígenas en el sur del Tolima y el Cauca, revivieron después de 1920, apoyadas por ligas agrarias o campesinas, por un efímero Partido Agrario, por disidencias liberales y por el Partido Socialista Revolucionario, y estuvieron concentradas en sitios como el Tequendama y Sumapaz. Allí surgieron sobre todo por los intentos de los cafeteros de impedir a los aparceros la siembra de café y por los conflictos entre propietarios y colonos que habían ocupado y abierto tierras que parecían no tener dueño. Los campesinos se enfrentaban a propietarios en dificultades, muchas veces liberales, y que no siempre tenían apoyo del gobierno. Éste acogió algunas peticiones campesinas, aprobó la ley 74 de 1926 que permitió comprar fincas de más de 500 hectáreas para parcelarlas en lotes no mayores a 50 hectáreas y repartió entre 1928 y 1936 algunas haciendas cafeteras, vendidas a sus aparceros.

Aunque en estos movimientos participó una parte pequeña del campesinado, se conservaron en la memoria de grupos rurales y organizaciones socialistas. Los campesinos de las zonas de conflicto de los veinte, que sintieron como triunfos notables las parcelaciones de las haciendas, mantuvieron un orgulloso recuerdo de ellas y una inclinación a seguir los movimientos políticos herederos de las Ligas Campesinas o del Partido Socialista Revolucionario que los

apoyaron. Allí, en Tequendama y Sumapaz, tuvo el Partido Comunista su base rural más importante durante los 30 años siguientes, aunque poco inclinada a las luchas armadas "ofensivas". Y en esta zona se formaron, en momentos de conflicto y provocación, sobre todo después de 1949, grupos armados para defenderse de ataques de propietarios o autoridades, pero que se resistían a volverse ejército revolucionario. La zona de Viotá es un buen ejemplo de esta continuidad desde las luchas por la propiedad para los colonos y aparceros de los años veinte hasta las guerrillas de autodefensa entre 1949 y 1964.

Mientras tanto, en las demás zonas de minifundio o pequeña propiedad, como Boyacá o Antioquia, el campesinado respaldó sobre todo al Partido Conservador, que defendía la religión y el orden y presentaba al liberalismo como afín al comunismo y a la destrucción de la propiedad privada. En zonas de colonización más recientes, pobladas por campesinos desplazados de pequeñas localidades y sujetos al frecuente choque con los propietarios y las autoridades, se formó un campesinado más cercano al liberalismo. El liberalismo mantuvo también fuerte presencia rural en la costa atlántica y en otros sitios donde se dieron las luchas de las "castas" durante el siglo XIX, que tendieron a dejar una identificación muy estrecha entre el liberalismo y los negros, a la que alude la copla popular recogida en el *Cancionero antioqueño*:

Un negro conservador  
es música que no suena.  
Es como un parche en el culo  
cuando el dolor es de muela.

El enfrentamiento del sindicalismo y los movimientos socialistas con el gobierno conservador, que coincidía con el esfuerzo liberal por volver al poder, ayudó a que los movimientos sindicales y las movilizaciones urbanas se asociaran con el Partido Liberal. Así, este partido, para 1930, contaba con mayorías fuertes en Bogotá y las ciudades de la costa atlántica, Santander y Valle y con un electorado amplio en las demás zonas urbanas, aunque el conservatismo tenía mayoría en las ciudades del área cafetera y de las regiones de

tradición colonial como Boyacá, Cauca o Nariño. Gran parte de las pequeñas localidades seguía dando su apoyo casi unánime a uno y otro partido con base en enfrentamientos y rivalidades del siglo xviii o xix (como Ríonegro, liberal, y Marinilla, conservadora, en Antioquia, o Socorro, liberal, y Pamplona o San Gil, conservadores, en Santander) y en la historia de conflictos locales.

Como la distribución de la población reflejaba la historia de la ocupación colonial, con el predominio de "castas" en tierra caliente y una herencia de mestizaje indígena en las zonas indígenas, el voto rural o de los pequeños poblados, en los escasos momentos en que se expresó libremente, como 1930, 1946 o 1958, tendió a seguir la geografía. Así, la tierra caliente se inclinó al liberalismo, con unos pocos enclaves y ciudades conservadores. La tierra fría, sobre todo de temprana ocupación española, fue más conservadora, rodeada de nichos y valles liberales o comunistas donde el campesinado se radicalizó. Las zonas de colonización antioqueña del siglo xix fueron mixtas, con colonos conservadores, provenientes de Sonsón o Marinilla, y zonas más liberales o equilibradas, como Pereira o Armenia; la colonización de vertientes de Santander a Cúcuta dejó una población rural dividida, más liberal en el sur, más conservadora en el norte.

#### PAZ Y VIOLENCIA

Para 1930 Colombia llevaba treinta años de relativa paz entre los partidos, sin guerras civiles ni grandes enfrentamientos. En los días de elecciones las pasiones se inflamaban, se oían vivas e insultos y las peleas eran a veces mortales, y en algunos conflictos sociales el gobierno o los propietarios echaban mano de la violencia contra manifestantes o colonos invasores.

Había homicidios, a veces escandalosos, y el sistema policial y judicial los enfrentaba con aparente éxito, aunque no faltaban las quejas por la impunidad, sobre todo desde que se suprimió la pena de muerte. El *Anuario estadístico de Antioquia* se sorprendía por el gran número de homicidios de 1914 en Medellín: cinco en una población de 100 000 habitantes. Setenta y cinco años después la tasa

sería casi ochenta veces más alta. Entre 1918 y 1927 ocurrieron en Antioquia 1 591 homicidios, pero hubo un acusado en más de 90% de los casos y unas 400 sentencias. Entre 2005 y mayo de 2008 hubo 63 000 homicidios en el país, y sólo hubo condenas en 2.7%.

Pero en comparación con los años de 1886 a 1902, parecía haber paz y tranquilidad. El Estado podía, casi sin policía, mantener el orden, pues los valores religiosos y las tradiciones rurales hacían respetar los mandamientos de Dios y, en menor medida, las leyes humanas. A pesar del lenguaje autoritario del gobierno, no parecía requerirse gran esfuerzo para dar seguridad. La policía local, en centenares de centros poblados, era suficiente para mantener el orden y las autoridades, con el apoyo de la comunidad, capturaban y sancionaban a los peores delincuentes. La arbitrariedad del gobierno, la decisión de perseguir y encerrar a los opositores, no se repitió después de los destierros ilegales de congresistas hechos por Reyes en 1905, aunque apareció en el tratamiento de los conflictos obreros y agrarios, hasta que se volvió a agitar la bandera de la amenaza revolucionaria en 1928.

El país, pues, parecía haber encontrado el camino a la democracia, la paz y el progreso económico. El optimismo del momento puede medirse por el libro *Colombia Cafetera*, de 1927, en el cual, a varios colores y en varios idiomas, se inscribieron las frases auto-complacientes del consenso nacional:

Colombia: su población es esencialmente pacífica, laboriosa, inteligente y frugal, honrada, valerosa, generosa y amante de la libertad y el progreso, de espíritu hospitalario, independiente y emprendedora.

Hay tolerancia de ideas religiosas y libertad de prensa.

No existen prejuicios de raza porque se goza de iguales derechos en todo el país.

Sus libertades públicas no se registran en ningún otro país del mundo.

La paz está cimentada en forma imperecedera.

La seguridad personal y el respeto por la propiedad son tradicionales.

Todo esto era cierto y engañoso, verdadero y falso. ¿Por qué podían los dirigentes creer que ése era el país en el que vivían y qué se escondía bajo las apariencias? Aunque Colombia había entrado en un camino de desarrollo económico rápido que no se interrumpió hasta la crisis de 1929, la tolerancia política era menor de lo que parecía: la paz de los últimos años se había logrado a partir de un arreglo engañoso e inestable: la concesión de un cupo fijo minoritario al liberalismo en el sistema representativo, pero manteniendo el control conservador del ejecutivo y la burocracia. Aunque esto calmó el afán revolucionario del liberalismo, que dejó de buscar el poder por las armas, convertía un eventual cambio de gobierno en un terremoto social. El sistema político no funcionaba de acuerdo con la Constitución ni los valores sociales democráticos permeaban la sociedad. Aunque muchos creían que las minorías debían tener derechos, que todos los ciudadanos eran iguales, que el Estado no debía prohibir la libre expresión de ideas, gran parte de los grupos dirigentes creían que era su derecho y su obligación orientar el país, que las ideas contrarias al consenso eran peligrosas y sólo podían discutirse en forma limitada y que, como se repetía, “el mal no tenía derechos”.

Aunque el conflicto social se había manifestado en áreas definidas, en pocas zonas rurales y pocos sindicatos, la respuesta represiva y violenta dejó la imagen de que el Estado estaba parcializado contra el pueblo. Si la protesta se acompañaba de gestos de desafío —pedreas, daños a las propiedades, discursos incendiarios— alcaldes y policías respondían con las armas. Así, las huelgas o marchas campesinas se convertían, por la exaltación de unos participantes, en batallas, con muertos y presos, que daban tono heroico a las luchas y comprobaban que el gobierno no toleraba la protesta social.

Los sindicatos, por su parte, no tenían capacidad de negociar con las empresas: con una mano de obra abundante, los huelguistas eran reemplazables. Por eso los sindicatos dependían de su capacidad política para provocar la intervención del gobierno. Solamente tuvieron éxito en sectores como el transporte, entre Barranquilla

y Bogotá, donde el gobierno los apoyaba, o en enclaves externos, donde podían convocar el nacionalismo contra los explotadores extranjeros.

El tono de las relaciones sociales, en las grandes ciudades, seguía marcado por la separación entre la “gente bien” y el “vulgo” y por el desprecio de las minorías étnicas y la cultura popular. Al mismo tiempo, se mantenía la correlación difusa pero real entre jerarquías sociales y color: la gente bien era la blanca o los mestizos y mulatos que podían pasar por blancos, mientras que, en las tierras frías, los indios y los mestizos aindiados eran el pueblo, pobre e ignorante, y en las zonas bajas, los negros y los mulatos eran la masa plebeya. La cultura aceptada mantuvo el rechazo a lo indígena y lo afrocolombiano y los esfuerzos por reconocer estos elementos estuvieron marcados por el paternalismo de los intelectuales y por gestos de desafío social y político de los que luchaban por el reconocimiento de la igualdad.

Estas tensiones sociales, presentes desde la Colonia, adquirieron fuerza con los cambios del siglo xx: el crecimiento de la industria y el comercio abrió posibilidades de ascenso económico para grupos distintos y la discriminación que éstos recibieron aumentó la tensión social y política. El liberalismo se volvió el partido de los sectores en ascenso: de los pobres y obreros, de los indios (como en Bogotá) y los negros (en Antioquia y las ciudades de la costa), que se definieron como el pueblo, en contraposición a las oligarquías, y a veces de los artesanos y las clases medias. Los políticos liberales más radicales, para movilizar una cauda incierta, apelaron a definir a los otros como “oligarcas”, incluyendo a los jefes de su partido, y llamaban a sus seguidores “el pueblo”. El enfrentamiento de pueblo y oligarquía (y de campesinos y terratenientes, pobres y ricos) endureció las relaciones entre grupos dominantes y nuevos sectores y les dio un tono intenso de resentimiento y reclamo.

Mientras tanto, en los políticos blancos se extendió la creencia de que la “raza” colombiana o sus componentes (negros, indios, mestizos, mulatos y zambos, o incluso los blancos españoles) tenían defectos genéticos, que no podrían ser eliminados por la educación o el avance social: sólo la inmigración de razas superiores permitiría el progreso, como argumentaron varios letrados entre 1918 y 1928



en un gran debate sobre las “razas colombianas”. Entonces Laureano Gómez subrayó los aspectos negativos de las “razas colombianas”, mientras otros insistieron en la necesidad de mejorar la raza con la inmigración, y algunos creían que esto se lograría con el mestizaje, que reuniría las virtudes de todos los grupos, minimizaría sus defectos y permitiría formar una cultura nacional fundada en la cultura occidental —sus valores éticos y políticos, la voluntad de progreso, la ciencia— y la democracia. En cierto modo esta idea se apoyaba, como el sueño regenerador, en crear una “identidad” nacional que borrara las diferencias, aunque para la Regeneración esa identidad era blanca, hispánica y católica, y para los intelectuales del siglo xx era mestiza, democrática y occidental.

A fines de siglo, sin embargo, el desarrollo de las ciencias sociales y la valoración de lo indígena y africano desautorizó la discusión en términos biológicos y abrió el camino a una visión positiva de las diferencias culturales: las costumbres y hábitos que se habían visto como obstáculos al progreso comenzaron a defenderse como riquezas. El esfuerzo de definir una nacionalidad contradictoria pero admisible para todos llevó a intelectuales, políticos y funcionarios públicos a insistir en el valor de la diversidad cultural y regional. García Márquez elogió la “malicia indígena”, mientras otros destacaban la creatividad musical de las poblaciones de origen africano o la riqueza gastronómica de las regiones. La Constitución de 1991, al declarar que Colombia estaba formada por varias “culturas”, trató de lograr un nuevo consenso, en el que cada cultura regional es a su vez un mosaico de culturas, con distintas tradiciones y diversa presencia de grupos étnicos, tradicionales o recientes.

Aunque la distribución de la riqueza fue siempre desigual, esto comenzó a verse como injusticia social sobre todo desde los años veinte y justificó el lenguaje radical. Los intelectuales de avanzada propusieron un progreso que, más que en el desarrollo económico y el mejoramiento gradual, consistía en la justicia social en la forma del socialismo. La desigualdad de la propiedad volvió al centro de los debates. Los cafeteros promovieron la idea de que la pequeña y mediana propiedad era la solución a los conflictos sociales, como ya pasaba en Antioquia, Caldas, Santander y otras regiones similares. Los partidos socialistas y la izquierda liberal presentaron el

latifundismo como responsable del atraso rural en las llanuras del Atlántico y de la opresión de la población de tradición indígena de Cundinamarca, Boyacá, Cauca o Nariño.

La cultura política era aún autoritaria, con débil tolerancia a la disidencia. La falta de un sistema electoral de reglas políticas confiables y aceptadas por todos convirtió la violencia y el fraude en tentación continua para ganar elecciones y luchar contra derrotas que se juzgaban inválidas. Esta lucha se apoyó en otros elementos del conflicto: el enfrentamiento del pueblo y la oligarquía y del catolicismo y el liberalismo, presentado como agente del laicismo, el protestantismo y el comunismo. Las desigualdades de riqueza y las diversas formas de discriminación sirvieron para alentar el conflicto político y justificar la revolución.

Entre 1924 y 1929 la tradición de las guerras civiles se unió a las nuevas ideas revolucionarias. Las organizaciones obreras se acercaron a los grupos conspiradores del liberalismo, que soñaban con la guerra civil o la revolución armada para acabar con el gobierno conservador. En las ciudades se formaron grupos de jóvenes liberales, atraídos por el socialismo, y de dirigentes de pequeños grupos de obreros y artesanos que, influidos por la Revolución rusa y el marxismo, el socialismo o el anarquismo, creían que debía hacerse la revolución armada y establecer el socialismo. La historia de los partidos revolucionarios comienza, más que con los partidos obreros de 1910 a 1918, con la creación del Partido Socialista, que participó en las elecciones de 1921 y apoyó la candidatura liberal de Benjamín Herrera, que incluyó en su programa algunas ideas de los socialistas. Luego se sumaron a él dirigentes obreros e intelectuales, influidos por un "grupo comunista" que se formó en 1924. En ese año el Congreso Socialista se dividió y un sector se declaró Primer Congreso Comunista de Colombia, encabezado por escritores y jóvenes abogados. Pidieron entrada a la Internacional Comunista y un delegado que hablara español para orientarlos. En diciembre de 1926 se reunió el III Congreso Nacional Obrero, presidido por Ignacio Torres Giraldo. Contra la oposición de dirigentes artesanales como Carlos León y Juan de Dios Romero, de visión más sindical, se aprobó la creación del anhelado partido comunista. Éste recibió el nombre de Partido Socialista Revolucionario y su secretario general

fue un intelectual, Tomás Uribe Márquez. El partido, además de respaldar las luchas obreras y campesinas, buscaba el fin del régimen conservador y esto, con el origen de muchos militantes, lo acercaba a los liberales. El mismo nombre de "revolucionario" atraía a liberales que sentían que su partido, como en el siglo XIX, debía hacer la revolución contra los conservadores. En la Convención Nacional del PSR en septiembre de 1927 hubo mucho liberal radical y Torres Giraldo habló de la inevitabilidad de la vía armada y la inminente insurrección para sustituir al régimen, lo que para la mayoría quería decir derribar el gobierno conservador.

El Partido Socialista Revolucionario fue recibido en la Internacional Socialista en 1928, con reservas por su composición intelectual y su débil arraigo sindical. En julio de 1928 el PSR formó un Comité Central Conspirativo para hacer la "revolución armada" de que hablaban sus documentos. El gobierno tomó a la letra las ilusiones y preparativos del PSR y trató de hacer creer al país que el riesgo de revolución era real y debía enfrentarse con firmeza. Para ello, el ministro de Guerra hizo aprobar una Ley de Facultades Extraordinarias o Ley Heroica, a fines del año, que los civilistas consideraron una respuesta desmesurada y represiva a un proyecto revolucionario imaginario. El PSR promovió a fin de año la huelga en los cultivos bananeros como parte de un proceso que llevaría a la toma del poder. Según Raúl Mahecha, principal dirigente de ésta, confiaban en que si se ganaba podrían tomar el poder en tres departamentos de la costa y apoderarse de Bogotá: en su opinión esto había fracasado por la debilidad de los dirigentes del PSR, que no le dieron apoyo real. La huelga terminó en tragedia cuando el gobierno, convencido de que tenía intención revolucionaria, mandó el ejército, que después de algunos enfrentamientos con obreros armados, en uno de los cuales murió el dirigente obrero Erasmo Coronel, ametralló una plaza llena de obreros y mató a cerca de cien trabajadores, que se convirtieron en miles en la memoria nacional y en el realismo mágico de Gabriel García Márquez.

La Internacional Comunista intentó corregir la línea del PSR y frenar un nuevo intento de revolución planeado para el 29 de julio de 1929, pero la orden de parar el levantamiento no llegó a todas partes, y en el Líbano los "bolcheviques" se levantaron y fueron re-

primidos con violencia. A partir de este momento el PSR perdió toda iniciativa, aunque presentó en 1930 la candidatura a la presidencia de Alberto Castrillón, un crítico de la línea insurreccional que tuvo menos de mil votos.

En 1931 el PSR se transformó en el Partido Comunista de Colombia y condenó los golpes armados y el sueño de una revolución violenta como ilusiones aventureras y "putchistas", mientras no existiera una organización comunista amplia y sólo tuvieran el respaldo de una ínfima parte del pueblo. Sometido a la disciplina estalinista, siguió la política de "frente popular" y respaldó al gobierno liberal de Alfonso López, visto como un régimen burgués progresista, aunque vacilante, mientras trataba de fortalecer los movimientos agrarios, sobre todo en Cundinamarca y Tolima.

## 10. LA REPÚBLICA LIBERAL: 1930-1946

En 1929 el desgaste del gobierno era grande. Al descrédito por la represión de las manifestaciones de Bogotá contra la corrupción y el clientelismo en junio, cuando murió un estudiante, y por la masacre bananera, se sumó la crisis mundial, que produjo una baja brusca de las exportaciones a partir de diciembre. Después de años de “danza de los millones” y de “prosperidad a debe” hubo quiebras y el gobierno despidió a más de 20 000 obreros de obras públicas.

Los liberales pensaron que había llegado el momento de ensayar el poder del voto, que sus dirigentes legalistas defendieron: frente a la amenaza militar, los conservadores se unían, pero se descuidaban ante la amenaza electoral. En efecto, los conservadores se dividieron y hubo dos candidatos, Alfredo Vásquez Cobo y Guillermo Valencia. Los dirigentes buscaron que el nuevo arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, decidiera y éste apoyó a Vásquez Cobo, para cumplir la promesa de su predecesor, pero el presidente Abadía escribió al Vaticano y logró el respaldo a Valencia. Muchos obispos, no obstante, siguieron con Vásquez Cobo, por lo que el Vaticano dio libertad a Perdomo, y éste volvió a apoyar a Vásquez Cobo. La confusión deleitó a los liberales, que lograron presentar un solo candidato.

La dirección liberal, con prudencia, postuló a Enrique Olaya Herrera, embajador en Washington, que llevaba años colaborando con los conservadores. Olaya insistió en que no aceptaría sino la candidatura de una concentración de ambos partidos y volvió a Colombia, donde hizo una veloz campaña con inmensas manifestaciones callejeras, en Barranquilla, Cartagena, Puerto Berrío, Medellín y otros sitios. Olaya ganó en marzo de 1930 con 45% del total de votos: los conservadores, juntos, todavía eran mayoría. Fue la

primera vez, desde 1851, que un candidato de un partido diferente al del presidente recibió el poder por su triunfo electoral, en medio de una ola latinoamericana de golpes y gobiernos militares. Junto al sufragio manejado por caciques de ambos partidos, hubo numerosos votos influidos por el debate político, estimulado por diarios cada vez más leídos, por sus comentarios y sus caricaturas. Además, sacó la política de clubes y restaurantes a la calle, con sus multitudinarias manifestaciones. El influjo del clero se desgastó en el debate interno conservador, en vez de insistir, como en elecciones previas, en la prohibición de votar por los liberales.

El presidente electo, consciente de las dificultades para gobernar como liberal después de cuarenta y cuatro años de dominio conservador, nombró un gabinete paritario, con cuatro conservadores (entre ellos los ministros de Gobierno, Guerra y Hacienda) y cuatro liberales. Antiguo republicano, Olaya escogió como ministro de Gobierno a Carlos E. Restrepo, el conservador que había presidido el arreglo de 1910 que permitió la representación de las minorías, y dio la mitad de las gobernaciones a conservadores.

Las elecciones de 1931 iban a ser una señal decisiva. Sin el apoyo de las autoridades ni el control del sistema electoral, el conservatismo podría perder sus mayorías, y su poder, basado en redes de empleados públicos y en un sistema electoral sesgado, podría desmoronarse. En 1929 se aprobó, pero poco se había avanzado en aplicarla, una cédula de ciudadanía con fotografía, para identificar a los electores y reducir el fraude. La tensión aumentó en muchos sitios, ante las denuncias de que los liberales preparaban un fraude. Para hacer más confiables las elecciones y evitar que los electores votaran varias veces, se ordenó que untaran su dedo de tinta indeleble al votar. De todos modos, con un sistema electoral que daba el derecho al voto para los cargos nacionales solamente a los que supieran leer y tuvieran ciertos ingresos mínimos, definir quién era elector de "primera clase" era una gran fuente de arbitrariedad. Las tres elecciones de 1931 —de asambleas, representantes y concejales— fueron preparadas con entusiasmo hostil: grupos, a veces armados, de conservadores y liberales se presentaban ante los jurados de inscripción para registrarse, en medio de gritos e insultos, que llevaban a frecuentes choques armados. La tradi-

ción de fraude y el enfrentamiento entre pueblos vecinos creaban condiciones para unas elecciones violentas, como había ocurrido desde 1910.

En diciembre de 1930, cuando comenzó la campaña, empezaron los incidentes: un encuentro armado entre conservadores y liberales produjo once muertos en Capitanejo, Boyacá. En los meses siguientes hubo nuevos choques en Cundinamarca, Boyacá y Santander. En las elecciones de 1931, sobre todo en octubre, se produjeron hechos de violencia y en todo el año hubo algo más de 200 muertos. En las de febrero de 1931 para asambleas locales y en las de mayo para Cámara de Representantes el liberalismo tuvo más votos, pues ganó en las ciudades más grandes. Sin embargo, en el Senado, de elección indirecta, el conservatismo mantuvo su mayoría. En 1932, año sin elecciones, los incidentes siguieron: en la versión conservadora, los alcaldes liberales y la policía atacaban y provocaban a los conservadores; en las versiones liberales, los conservadores, buscando recuperar las mayorías en 1933, se armaron para atacar a los liberales.

El nombramiento de gobernadores y alcaldes liberales, que no se había hecho desde 1886, provocó grandes resistencias, sobre todo al empezar a repartir cargos: comenzaron a nombrar policías, maestros y hasta jueces liberales, incluso en zonas conservadoras. La policía se volvió liberal en pueblos con alcalde de este partido.

Los enfrentamientos de 1931 y 1932, fuertes en Boyacá, Santander y algunas áreas de Bolívar, se daban en un país gobernado por una coalición, con ministros de Guerra y Gobierno y la mitad de los gobernadores conservadores, pero con profundas divisiones en cada partido. Mientras muchos de los dirigentes nacionales buscaban calmar la violencia, los jefes locales, gamonales y caciques, luchaban con todas las armas a su alcance. El conservatismo apoyó al comienzo al gobierno y pasó poco a poco a la oposición, aunque todavía en agosto de 1932 el ministro de Gobierno era conservador. Laureano Gómez se lanzó ese año a una oposición ruidosa y agresiva, acompañada de ataques contra sus copartidarios gobiernistas, mientras que un grupo de políticos jóvenes, los "Leopardos", introdujo la retórica de la derecha europea para invitar a la guerra como fuerza creativa. En el liberalismo, dirigentes cercanos a obreros y campesinos, so-

bre todo en Cundinamarca, impulsaban manifestaciones contra los terratenientes, con apoyo comunista, reprimidas por la policía y las autoridades. El 31 de agosto de 1932 la fiesta por la aparición del periódico del Partido Comunista en Viotá terminó con tres campesinos muertos.

El choque político cedió de repente por un hecho externo: en septiembre de 1932, soldados peruanos ocuparon Leticia, en el Amazonas, y Colombia entró en guerra con Perú. El gobierno logró apoyo entusiasta: el enemigo exterior creó una explosión insólita de nacionalismo, en un país todavía herido por la separación de Panamá. Los conservadores anunciaron la paz interior mientras había guerra con el país vecino y trataron de mostrarse más nacionalistas que el gobierno, al que presentaron, cuando se acordó un armisticio en mayo de 1933, como cobarde: la "guerra" reforzó la retórica bélica que después volvió a usarse contra el gobierno liberal.

Terminado el breve conflicto con el Perú, de pocas acciones militares, los conservadores volvieron a la oposición y rechazaron el Protocolo de Río que le dio fin. Para subrayar la ilegitimidad del gobierno, por el fraude y la violencia, no participaron en las elecciones de 1933 y 1934. La abstención permitió que se eligiera un Congreso homogéneo y que en 1934 Alfonso López fuera elegido presidente con gran votación liberal, probablemente con algunos votos fraudulentos.

Aunque la violencia política y la represión de las protestas disminuyeron en los años siguientes, la tensión política no dejó de crecer y fue llevando, hacia 1942-1945, a que la pugna entre liberales y conservadores fuera, más que un enfrentamiento político por el triunfo electoral, una guerra santa por modelos sociales: el orden conservador, basado en el mantenimiento de las jerarquías sociales y el control religioso, y alentado por la fe en el esfuerzo propio, y un orden liberal-popular, basado en la idea de que la tarea central del Estado era promover el progreso económico apoyando a los empresarios, tratando de corregir las desigualdades e injusticias sociales y promoviendo la igualdad mediante la educación, la tributación y el gasto social. Los liberales consideraban injusto el orden tradicional y estaban dispuestos a apoyar a los grupos populares en sus conflictos con propietarios y empresarios reaccionarios, y



a quitar a la Iglesia su poder temporal. Y los conservadores veían a los liberales como demagogos dispuestos a promover la lucha de clases y la destrucción del orden, mediante la violencia y la expropiación injusta de los bienes legítimos de los propietarios. Y aunque en ambos partidos se prefería derrotar al enemigo con herramientas legales, en ninguno se rechazaban con convicción amplia el fraude o la violencia propios.

#### LA REVOLUCIÓN EN MARCHA Y LA POLÍTICA DE MASAS

Alfonso López Pumarejo gobernó entre 1934 y 1938, con un ministerio homogéneo y sin oposición parlamentaria. Esto le permitió aplicar el programa de “la revolución en marcha”, que pretendía modernizar al país. A pesar de la retórica de confrontación, los cambios no fueron muy drásticos. Entre éstos estuvieron una reforma constitucional que dio otra vez el voto a pobres y analfabetos. El sufragio universal estuvo acompañado de la movilización del electorado, que se acostumbró a hacer manifestaciones callejeras para respaldar un gobierno que prometía educación, separación de la Iglesia y el Estado (sobre todo, liberar la educación de la tutela religiosa y establecer el registro civil), impuestos progresivos y una solución al problema agrario. El nuevo gobierno, que aceptó formar un “frente popular” con el Partido Comunista, tomó posición a favor de los sindicatos, cuya organización promovió y cuyas huelgas ayudó a resolver favorablemente. Esto le permitió al liberalismo atraer a muchos intelectuales y políticos de izquierda que habían fundado partidos populares, como la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR), creada en 1931 por Jorge Eliécer Gaitán y que no tuvo respaldo amplio. El Partido Liberal se convirtió en una alianza flexible de sectores empresariales y capitalistas y grupos sindicalistas y populares radicales: las nuevas clases medias y obreras, que en otros países de América Latina crearon partidos diferentes, se incorporaron en Colombia ante todo al liberalismo y en menor escala a sectores conservadores.

López era, más que un revolucionario social, un liberal progresista que creía en la obligación del Estado de apoyar un desarrollo

económico que permitiera mejorar el nivel de vida de obreros y campesinos. Y creía que con un sistema electoral limpio y gobiernos que no impusieran los resultados a la fuerza, los partidos podían superar los odios heredados y convertirse en promotores abiertos, sin exceso de transacciones, de programas que los ciudadanos pudieran apoyar o rechazar en las elecciones.

#### EL PROBLEMA AGRARIO

El problema agrario resurgió en la década de 1920. En zonas de latifundios, como en la costa atlántica, organizaciones de asalariados o aparceros buscaban mejorar sus condiciones laborales, sobre todo en el Sinú. En zonas de colonización del siglo XIX (Antioquia, Santander, Tolima, vertientes de Cundinamarca) los problemas surgían del choque entre terratenientes y colonos, debido a la falta de claridad de los títulos de propiedad. Muchos colonos habían ocupado y cultivado tierras que suponían baldíos sobre la base de que su explotación les permitiría obtener su propiedad, como lo determinaron las leyes. Además, desde 1882 la adjudicación de un baldío se anulaba si no había sido trabajado en los diez años siguientes a ésta. Así, los ocupantes de buena fe de baldíos titulados pero explotados tenían derecho a la propiedad. Si el propietario del predio inculto mostraba un título válido, la ley daba al colono el derecho a comprar la tierra o a recibir el valor de las mejoras. Por esto, los colonos estaban tentados a asumir que la tierra sin explotar era pública y a ocuparla y desmontarla.

Pero los baldíos asignados entre 1827 y 1931 fueron menos de 3% de la tierra del país, y la mayoría de las propiedades se apoyaba en mercedes de tierras coloniales o en títulos de compraventa no sujetos a reversión. Los dueños de estas tierras, al ver que un predio se valorizaba con el trabajo de los colonos, reclamaban su propiedad y trataban de expulsarlos o de llegar a arreglos que reconocieran su propiedad. En algunas zonas donde los colonos tuvieron el apoyo de organizadores campesinos o de abogados socialistas o liberales, como en Cundinamarca, éstos se resistieron a entregar las tierras ocupadas, usando la fuerza o la ley. El conflicto se agravó cuando

en 1926 la Corte Suprema de Justicia decidió que para expulsar a colonos había que demostrar un título originario expedido por el Estado. Una parte muy pequeña del territorio los tenía: la mayoría de las propiedades surgía de ocupaciones legalizadas por compraventas aceptadas por la comunidad durante centenares de años y registradas (sobre todo por grandes y medianos propietarios, allabetas y con recursos) en escribanías públicas y notarías.

Otro conflicto enfrentó a los terratenientes con aparceros y arrendatarios. En Colombia las grandes plantaciones trabajadas con asalariados eran pocas fuera del banano y la caña. Casi todas las grandes propiedades estaban ocupadas por ganado —que tuvo mejoras importantes en el siglo xix por la introducción de pastos, nuevas razas y alambre de púas— y pequeños lotes de pancoger, entregados a los agregados como pago parcial por su trabajo. La expansión de cultivos comerciales en la segunda mitad del siglo xix (caña, tabaco, añil y, sobre todo, entre 1870 y 1899, café) hizo que los propietarios entregaran a los cultivadores lotes para que sembraran estos productos a cambio de una participación en la cosecha (aparceros). Si la relación entre propietarios y aparceros no era buena, el control del producto, para distinguir la cosecha propia de la de los campesinos, era difícil y por ello fue frecuente prohibir la siembra de “cultivos permanentes” como el café por aparceros o agregados, lo que provocó nuevas protestas.

El gobierno, para resolver estos problemas, aprobó en 1936 la Ley 200, según la cual quien ocupara la tierra de buena fe y sin conflicto se presumía dueño de ella (con lo que buscaba resolver el problema a los propietarios que no tenían un título original de propiedad, es decir, la gran mayoría). Al mismo tiempo, para favorecer a los colonos, se presumían baldías las tierras inexploradas y se consideraban propietarios los colonos si las habían ocupado durante los dos años previos a la ley. Además decretó que todas las tierras no explotadas durante diez años, y no sólo los baldíos, revertían al Estado, aunque nada se hizo para aplicar este precepto. En el papel parecía una buena solución, derivada de una concepción moderna (el derecho de propiedad surge del trabajo, toda tierra abandonada o no explotada vuelve a manos del Estado, los títulos inscritos basados en compraventas entre particulares son válidos pero sin eficacia

contra colonos de buena fe), y fue muy atacada como enemiga de empresarios y ejemplo de las tendencias comunistas del gobierno. En la práctica confirmó la gran propiedad: la inmensa mayoría de la tierra de latifundistas, si tenía títulos, no había conflicto con colonos y mostraba alguna forma de uso, quedó en firme.

En los siguientes 30 años la ganadería sirvió a muchos para probar que un predio estaba siendo explotado. Y como la presunción de propiedad de los colonos ponía en peligro los títulos de quienes tenían aparceros, éstos fueron expulsados preventivamente de las haciendas. A la desaparición de los lotes de pancoger que usufructuaban los campesinos, de donde provenía la mayor parte de la producción de alimentos distinta a la de los minifundistas, se atribuyó una caída fuerte en la producción de alimentos en los años siguientes. Por eso, en 1944 la Ley 100 trató de regular estos contratos y de revivir la aparcería, cuya conveniencia económica y social parecía clara, pero prohibió a los aparceros sembrar sin permiso del dueño cultivos permanentes que después sirvieran para reivindicar la propiedad o las mejoras. Al mismo tiempo extendió a quince años el plazo para la reversión de la tierra no usada si se hacían contratos de aparcería de cierta magnitud.

No es claro si entre 1936 y 1945 la propiedad rural se concentró o no, pero el periodo siguiente fue el de mayor desarrollo de la gran propiedad y estas normas impulsaron la intensa colonización, que convirtió inmensos territorios baldíos y de selva, sobre todo en las zonas bajas, en los Llanos Orientales, el Caquetá, el Magdalena Medio o Urabá, en propiedades privadas convertidas en pastos o cultivos comerciales. Tomó fuerza entonces la transformación del campo por la conversión de las grandes propiedades mejor situadas en plantaciones modernas, que añadieron a la caña y al banano productos como el algodón, el arroz, el ajonjolí y el sorgo.

#### LA PAUSA LIBERAL

Las elecciones de 1938 para la presidencia, las primeras por sufragio universal y directo desde 1856, las ganó, con el apoyo de liberales y comunistas y sin que los conservadores votaran, el liberal Eduardo

Santos, director de *El Tiempo* y amigo de transacciones y acuerdos. En el poder, Santos frenó aspectos conflictivos de la "revolución en marcha" sin alterar su contenido básico: protección moderada a la industria y al café, medidas favorables a obreros y a campesinos, apoyo a grupos empresariales modernos. Desaparecieron los gestos ruidosos de solidaridad con los movimientos sindicales y campesinos y se abandonó el "frente popular" con el Partido Comunista, pero Santos mantuvo el apoyo a la Confederación de Trabajadores y creó un Instituto de Crédito Territorial, para dar vivienda a obreros y empleados organizados. Por otra parte el gobierno creó un Instituto de Fomento Industrial (IFI), que ayudó a montar fábricas de llantas y de otros productos escasos por la guerra. La relación con los cafeteros, que había tenido algunas dificultades en el gobierno anterior, cuando el economista liberal Alejandro López había sido impuesto por el gobierno como gerente de la Federación de Cafeteros, mejoró cuando el gobierno apoyó, en diciembre de 1940, el primer "pacto cafetero" con Estados Unidos, que garantizó precios altos para el producto.

El gobierno fue muy cuidadoso con la Iglesia, evitando choques y provocaciones, mientras negociaba en Roma la modificación al concordato de 1887, firmada por el Vaticano en abril de 1942: los cementerios pasaron al Estado, los jueces adquirieron poder para decretar separaciones de cuerpos, pero no se admitió el divorcio y para casarse por lo civil se siguió exigiendo que los contrayentes abjuraran públicamente de su religión. Tampoco se aceptó la libertad de conciencia que los liberales incluyeron en la Constitución. A pesar de que la reforma era casi nominal, los obispos estuvieron en desacuerdo y el conservatismo se opuso con vigor a ella, de modo que aunque el concordato fue aprobado por el Congreso, el gobierno prefirió no ratificarlo y Laureano Gómez usó el concordato mismo y el reconocimiento de la libertad de conciencia como pruebas de que el liberalismo no había cambiado y seguía empeñado en atacar a la Iglesia y al pueblo católico. Finalmente, el concordato fue ratificado en 1943 por el siguiente gobierno.

Santos pues, confirmó la "pausa" en la "revolución en marcha" que López había anunciado y de la que se había arrepentido: en su último discurso ante el Congreso lamentó haberla hecho, y aludió

al "republicanismo" de Santos, ese tipo de movimiento que había intentado civilizar las costumbres colombianas por el único camino que no debía adoptarse: "restar fuerza a la lucha ideológica".

Los conservadores acentuaron su rechazo al liberalismo. En 1939 Aquilino Villegas, desde *El Siglo*, recomendó al conservatismo la adopción de la "lucha armada" y Laureano Gómez elogió la "acción intrépida" en la convención conservadora. Los liberales, tranquilos en el poder —habían ganado al conservatismo cuando éste se había presentado, en 1935, 1937 y 1939— mantenían sus disputas internas. López comenzó a diferenciarse del gobierno, para preparar el regreso al poder. Fundó un periódico, *El Liberal*, dirigido por su hombre de confianza, Alberto Lleras Camargo, y mostró sus desacuerdos con Santos, por su política demasiado fiel a Estados Unidos o su timidez social. Ya en 1941 el liberalismo estaba dividido, con una dirección gobiernista y una disidente, que lanzó la candidatura de Alfonso López Pumarejo y ganó por poco las elecciones parlamentarias de ese año, lo que convirtió a López en el candidato oficial, aunque muchos liberales insistieron en oponerse a su reelección.

La Segunda Guerra Mundial llegó de pronto, aunque no la afinidad de Santos con el gobierno de Roosevelt: apenas asumió el poder, en 1938, firmó un acuerdo de cooperación naval con Estados Unidos y en la Conferencia de Lima, Colombia intentó que se ratificara la política de solidaridad continental en caso de ataques a cualquier país americano que había sido aprobada antes en La Habana. Santos, cercano a círculos antifranquistas y antinazis, se solidarizó con las democracias y los países enfrentados a Alemania, pero no quiso romper con este país: su primera decisión, en septiembre de 1939, fue declarar la neutralidad de Colombia.

En esta primera fase Santos, aunque se negó a darles bases militares, ayudó sin ruido a Estados Unidos, que también era neutral, haciendo retirar al personal alemán de SCADTA, la firma aérea colombo-alemana. Sin embargo, en enero de 1940, Pan American anunció que asumiría su control: había comprado en secreto las acciones, para sorpresa de Santos, que buscaba que pasara al gobierno. Finalmente, Pan American negoció y se creó Avianca con mayoría oficial y de accionistas locales.

En diciembre de 1941, a la entrada en guerra de Estados Unidos, Colombia rompió relaciones con Alemania, pero no declaró la guerra, incluso después del hundimiento de dos barcos colombianos por los alemanes en junio y julio de 1942.

Colombia sólo “declaró” la beligerancia —una palabra escogida para evitar la declaración de guerra— en noviembre de 1943, durante el gobierno de López, como respuesta al hundimiento del barco privado Ruby por un submarino alemán, pero no tuvo una participación bélica muy activa: puso muchos bienes de alemanes en administración, confinó en 1944 a unos 100 alemanes en Fusagasugá y mantuvo alguna vigilancia sobre los inmigrantes alemanes y japoneses, a los que alejó de las costas y de Bogotá, aunque los que eran parte de las redes antifascistas se quedaron en sus sitios y recibieron apoyo estatal.

Santos promovió una activa política cultural: acogió a emigrantes europeos, como los profesores de la Escuela Normal Superior o el antropólogo Paul Rivet, que ayudó en el Ministerio de Educación a crear el Instituto Etnológico Nacional. Vinieron el socialista español José Prat, el poeta comunista Eric Arendt, los profesores José María Ots Capdequi o Gerhard Masur. Fue una migración selectiva, con énfasis en intelectuales, pero llegaron también inmigrantes árabes o judíos. Estableció la Radio Nacional, que comenzó a emitir programas culturales desde 1940: música folclórica y clásica, teatro universal y nacional, conferencias y debates. Abrió desde 1940 los salones nacionales de arte: mostraron las nuevas tendencias artísticas asociadas con el liberalismo, como el indigenismo y ciertas formas de vanguardia y de pintura alusiva a problemas sociales y políticos. Se destacaron los muralistas antioqueños, como Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo (que ganó el premio en el Primer Salón de Artistas) y pintoras como Débora Arango, que desafiaron las convenciones al pintar desnudos e imágenes de prostitución y alcoholismo, atacadas por la curia y por los periódicos conservadores como parte del proceso de corrupción promovido por el partido de gobierno. En el Tercer Salón de Artistas se premió una *Anunciación* de Carlos Correa, en la que la Virgen María aparecía desnuda: el cuadro se vio como una blasfemia. La *Anunciación* y las pinturas más polémicas de Débora Arango sólo tuvieron tímidas exhibicio-

nes durante los veinte años siguientes. Los murales de Pedro Nel Gómez hechos después de 1935 en el Concejo Municipal de Medellín fueron cubiertos a fines de los cuarenta, pues tenían mineras desnudas. Estos artistas —así como los pintores indigenistas, como Luis Alberto Acuña— subrayaron su originalidad en contenidos desafiante y se mantuvieron dentro de la pintura figurativa que tenía el apoyo de los artistas comprometidos. En Colombia tuvo poco impacto la vanguardia formalista: hasta 1947 o 1948 no aparecen ejemplos de arte abstracto o surrealista. Así, los artistas participaron con cierto vigor en las polémicas culturales y políticas, pero no rompieron con las formas de representación tradicionales.

#### EL SEGUNDO GOBIERNO DE ALFONSO LÓPEZ

Al final del gobierno de Santos los partidarios de reanimar la “revolución en marcha” promovieron la candidatura del ex presidente Alfonso López. Ésta tuvo el apoyo de los sindicatos y de los dirigentes más izquierdistas, y cierta hostilidad del gobierno y de políticos como Jorge Eliécer Gaitán, que había pasado del radicalismo de izquierda al gobierno de Santos. De todos modos, López fue elegido candidato oficial, apoyado con tibieza por Santos y su gobierno, mientras que los grupos liberales enemigos del sesgo social, algunos empresarios, y los conservadores se unieron en torno a Carlos Arango Vélez, un empresario liberal enemigo de las tendencias “socialistas” del presidente. López ganó en los departamentos siempre liberales (Bolívar, Atlántico, Tolima, Santander), mientras que Arango tuvo mayoría en Caldas, Cauca y Valle y casi gana en Antioquia, donde los aparatos políticos eran cercanos a los empresarios y la Federación de Cafeteros y donde el campesinado era más respetuoso de la ley y el derecho de propiedad. Además López barrió en Boyacá y Norte de Santander, más conservadores, lo que puede indicar el peso de la maquinaria oficial.

El gobierno de López siguió apoyando a los aliados en la guerra, e incluso intensificó la persecución a los sospechosos alemanes. Las condiciones de la guerra hicieron difícil promover proyectos reformistas, de modo que fue un gobierno moderado y que perdió el



contacto con las masas urbanas. La política se animó por las duras acusaciones de *El Siglo* al hijo del presidente y por un ambiente de chismes y calumnias impulsado por el conservatismo. López, desalentado, pidió varias licencias durante su mandato para acompañar a su esposa en sus problemas de salud y fue reemplazado por Darío Echandía. Al volver, en julio de 1944, hubo un fallido golpe militar, cuando algunos oficiales lo encerraron brevemente en Pasto. Después de impulsar una reforma constitucional que se concentró en aspectos administrativos, López renunció a la presidencia en julio de 1945 y lo reemplazó Alberto Lleras Camargo.

En su política social adoptó la Ley 100 de 1944, ya mencionada, y trató de modificar la lógica sindical. Hasta entonces, las huelgas exitosas eran las que se hacían en sectores claves de la economía y se resolvían con apoyo del gobierno, favorable a los sindicatos. Esto había llevado a un sindicalismo aliado al gobierno y había permitido consolidar una central obrera única, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, dominada por liberales y comunistas, sin mucho peso en las empresas privadas; nunca llegó a tener ni 6% de la fuerza laboral afiliada. La Ley 6 de 1945 trató de crear condiciones para la negociación colectiva en empresas privadas, lo que fortaleció el sindicalismo de base y sirvió para mejorar las condiciones y prestaciones laborales. Al mismo tiempo buscó frenar el sindicalismo político, para lo cual prohibió las huelgas de solidaridad y las huelgas en los servicios públicos. El breve gobierno de Alberto Lleras trató de hacer cumplir estas normas y se enfrentó a la CTC, que intentó una huelga general que fracasó y fue aprovechada por el gobierno para romper la tradición de apoyo político a las negociaciones sindicales: en diciembre de 1945 declaró ilegal la huelga de trabajadores del río Magdalena y obligó a los sindicatos a someterse a un arbitramento.

En los años siguientes se fortalecieron los sindicatos en empresas privadas, pero se orientaron en general hacia una nueva central, la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, creada con el apoyo de la Iglesia y del nuevo gobierno conservador, la cual obtuvo su personería jurídica sólo en 1949, cuando se rompió el gobierno de unidad nacional. La CTC mantuvo su vínculo estrecho con el liberalismo, aunque con una fuerte presencia comunista, hasta 1952:

en mayo de ese año, en el X Congreso, el Partido Liberal presionó a la CTC para nombrar una dirección puramente liberal, ante lo cual el Partido Comunista retiró sus delegados y creó una CTC paralela.

En julio de 1945 la convención liberal escogió como candidato oficial a Gabriel Turbay, nieto de inmigrantes libaneses. Jorge Eliécer Gaitán y sus seguidores no asistieron a la convención y lanzaron en septiembre su candidatura disidente. Aunque en años recientes había sido un fiel militante del partido y participó como ministro en la "pausa" a la "revolución en marcha", la memoria de su radicalismo de 1929 a 1935 le permitió revivir un pasado de luchador popular. Orador elocuente, convirtió la plaza pública en escenario central de la política, con manifestaciones entusiastas en las cuales hablaba al "pueblo" y lo contraponía a la oligarquía, compuesta por los dirigentes liberales y conservadores.

La división liberal enfrentaba a dos políticos con una historia de radicalismo juvenil (Turbay había sido fundador del Partido Socialista Revolucionario en 1926 y Gaitán de la UNIR) y de gestión en los gobiernos liberales, entre 1936 y 1944. Gaitán se presentó como el candidato del "pueblo" mientras que caracterizaba a Turbay como el representante de los políticos profesionales y de las maquinarias lopistas. Los discursos de Gaitán, invitando a la unión del pueblo liberal y conservador, al abandono de sus divisiones para enfrentar al enemigo común, la oligarquía, atraieron amplios sectores urbanos. Sin embargo, Turbay obtuvo el apoyo de las organizaciones obreras y del Partido Comunista.

Los conservadores anunciaron que no participarían en las elecciones, lo que estimuló la decisión de ambas candidaturas de ir hasta el final: Gaitán se negó varias veces a aceptar la unión liberal a menos que se demostrara que la división produciría el triunfo conservador. Los conservadores dijeron en varias ocasiones que apoyarían a Gaitán y, en diciembre de 1945, la embajada de Estados Unidos informó a su gobierno que "era posible" que la división entre Turbay y Gaitán "permita a los conservadores, aunque estén apoyando aparentemente a Gaitán, ampliar la brecha dentro del Partido Liberal hasta el punto en que podrán lanzar un candidato a última hora con excelente probabilidad de éxito. Los rumores actuales [...] indican que Mariano Ospina Pérez puede ser el candidato conserva-

dor". En efecto, el 24 de marzo, mes y medio antes de las elecciones, los conservadores lanzaron su candidatura, con el apoyo de Laureano Gómez, que sabía que la suya habría producido la unión liberal.

Su campaña trató de presentar a Ospina, un empresario antioqueño que había mostrado su habilidad como dirigente cafetero, industrial y urbanizador, como un político prudente, tolerante y católico, ejemplo de las virtudes nacionales, cercano a campesinos y obreros. En sus intervenciones subrayó su moderación política y social y anunció que, si era elegido, gobernaría con un gabinete paritario de Unión Nacional. Incluso para muchos liberales tanto los antecedentes marxistas de Turbay y el apoyo que le daban los comunistas, como los discursos encendidos de Gaitán contra las oligarquías, se veían amenazantes. Además, Turbay fue presentado por los conservadores y los gaitanistas, como "el turco", alguien "sin una gota de sangre colombiana", y Gaitán, por los conservadores, como "el negro", el jefe de una banda anarquista, violenta y borracha. Ambos representaban, para dirigentes como Laureano Gómez y Guillermo León Valencia, un peligro para Colombia. Turbay también tenía la mancha, como ministro de Relaciones Exteriores, de haber restablecido relaciones con la Unión Soviética y haber logrado la firma del Vaticano para el concordato.

En las elecciones del 5 de mayo de 1946, Ospina obtuvo 45% de los votos, seguido por Turbay, mientras Gaitán logró apenas 25% del voto popular. Ospina ganó en los departamentos cafeteros y de tradición conservadora y campesina (Antioquia, Boyacá, Caldas), mientras Turbay ganaba en los departamentos liberales como Santander, Valle y Tolima. Gaitán logró derrotar a los conservadores apenas en tres departamentos (Bolívar, Atlántico y Cundinamarca) sobre todo por el voto de Cartagena, Barranquilla y Bogotá. Turbay tuvo gran ventaja entre los liberales de Antioquia y Valle. El gobierno de Alberto Lleras Camargo se empeñó en que hubiera una votación sin presiones ni fraudes, y estas elecciones ofrecen el retrato más exacto de las lealtades políticas entre 1938 y 1950. Los liberales, resentidos por la ausencia de apoyo del gobierno, hablaron de que habían recibido, como dijo Turbay, "una alambrada de garantías hostiles" por parte del gobierno y Lleras fue abucheado por los gaitanistas al salir del Palacio de Gobierno el día de la transmisión del mando.

## 11. VIOLENCIA Y DICTADURA: 1946-1957

### EL GOBIERNO DE OSPINA PÉREZ Y LA VIOLENCIA DE PARTIDO

Ospina Pérez anunció en 1946 un gobierno de Unión Nacional con gabinete paritario: los jefes moderados de ambos partidos, con el recuerdo de 1931, volvieron a buscar —como lo había sugerido López Pumarejo al invitar a formar un “Frente Nacional”— el acuerdo entre ellos para prevenir la reaparición de la violencia entre los partidos.

La respuesta del liberalismo a la Unión Nacional no fue entusiasta. Alfonso López y Gabriel Turbay se retiraron de la política, mientras Alberto Lleras volvió a su trabajo de periodista y fundó la revista de noticias *Semana*. Eduardo Santos quedó como principal dirigente del Partido Liberal oficial. Gaitán, por su parte, decidió no colaborar con el gobierno conservador: esperaba que una posición firme le permitiera organizar alrededor suyo el desanimado Partido Liberal. En la convención gaitanista de enero de 1947 hizo aprobar un programa moderado, para recuperar el apoyo de los liberales moderados y amigos de Estados Unidos. En las elecciones legislativas de marzo el Partido Liberal mantuvo su mayoría, algo disminuida, y el beligerante gaitanismo se impuso al santismo. Gaitán quedó como jefe del liberalismo, aunque las reservas de los grupos afines a Santos y López se mantuvieron.

Desde finales de 1947 se presentaron choques armados, sobre todo en zonas rurales, en los que murieron liberales: era evidente que en varias regiones los jefes conservadores locales, a veces con la complicidad de las autoridades, promovían el ataque a los liberales, para amedrentarlos y afirmar su dominio. Gaitán denunció la

persecución a sus copartidarios, que siguió creciendo. En febrero de 1948 hizo una "marcha del silencio": más de 40 000 liberales se reunieron en la plaza de Bolívar, sin un grito, para oír la voz de su jefe, que pidió al gobierno paz y respeto para la vida de sus copartidarios. Ese mismo día, en Manizales, la policía atacó una manifestación liberal y murieron 12. Hubo nuevos choques: en los pueblos, una reunión política, animada con aguardiente o cerveza podía terminar en una pelea armada con los espectadores del otro partido o con la policía, con vivas, insultos y muertos.

Aunque al comienzo el gobierno pensaba incluir a Gaitán en la delegación oficial a la conferencia de la Unión Panamericana, que se reuniría en Bogotá en abril, a última hora lo excluyó, cediendo a las presiones de Laureano Gómez, que seguía pensando a largo plazo en la derrota total del liberalismo: fue un gesto que este partido sintió como una agresión y llevó a que, junto con los hechos de violencia y las protestas de Gaitán, en febrero los liberales, con pocas excepciones, abandonaran la coalición y se retiraran de sus cargos. Cuando el 9 de abril Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado al salir de su oficina en el centro de Bogotá, la reacción espontánea fue creer que lo habían matado sus enemigos políticos: grupos extremistas dentro del gobierno o del conservatismo. Laureano Gómez, a quien las masas juzgaban como el principal enemigo de su jefe, salió con prisa del país. Grupos liberales de Bogotá, donde estaba la mayor fuerza gaitanista, se lanzaron a las calles a protestar, quebrando las vitrinas de los almacenes e incendiando los edificios de los enemigos de Gaitán, como el periódico *El Siglo*, el palacio del arzobispo y varias oficinas del gobierno. Los jefes liberales trataron de convertir la furia desordenada popular en presión para lograr la caída de Ospina Pérez y pidieron cita con el presidente, que los recibió al final del día.

Mientras tanto, las vitrinas rotas invitaban al robo de mercancías y el saqueo de estancos y licoreras rompió las inhibiciones populares. La policía bogotana tenía todavía muchos agentes liberales —lo que sugiere que el plan de destruir al liberalismo no tenía en el gobierno la urgencia que le daban otros jefes nacionales o de provincia—, y en algunos casos éstos entregaron sus armas a los manifestantes. Desde los edificios hubo disparos al ejército, pero

se trató de una revuelta caótica, sin plan y sin acción militar coordinada. Algunos dirigentes de izquierda trataron de que el pueblo buscara la toma del poder y la revolución, aunque, sin preparación previa, se limitaron a pedir por radio que pararan los saqueos y que se organizaran para enfrentar al gobierno, pero los manifestantes callejeros no podían oír las emisoras. Otros jefes liberales usaron la radio para pedir a las masas venganza inmediata, lo que influyó para que en varias ciudades y pueblos los enfurecidos liberales atacaran a los que veían como enemigos. Iglesias y casas curales fueron quemadas y en Armero lincharon al cura. En algunos sitios los liberales, sobre todo gaitanistas y a veces con el apoyo de comunistas y socialistas, declararon que asumían el poder y formaron "juntas revolucionarias": así ocurrió en Barrancabermeja, Libano y otros sitios pequeños.

Finalmente, en Bogotá, siguiendo a los jefes, una gran masa se acercó al Palacio de Gobierno, donde esperaron los resultados de las negociaciones con el presidente. Carlos Lleras y Darío Echandía pidieron su renuncia, pero el presidente defendió su legitimidad, esperando la llegada de refuerzos militares. En la mañana del 10 de abril, cuando el gobierno ya había reprimido la revuelta, que pudo haber dejado unos 2000 muertos en Bogotá y unos 500 en el resto del país, se logró un acuerdo: habría otra vez un gobierno de coalición nacional, con un ministro de Gobierno liberal, para garantizar un régimen imparcial en las siguientes elecciones y evitar más violencia.

A pesar del gabinete paritario y de que el presidente trató de que los gobernadores nombraran secretarios de gobierno de partido diferente al suyo, en los meses siguientes los incidentes continuaron y la desconfianza creció. Aunque algunos podían creer en la paz, muchos liberales estaban seguros de que la persecución volvería y había que prepararse para enfrentarla, mientras los conservadores más desconfiados creían que los liberales estaban ganando tiempo para una eventual revuelta.

El gabinete de coalición se mantuvo hasta mayo de 1949. Aunque los actos de violencia se redujeron en comparación con el año anterior, siguieron presentándose con regularidad. Algunos pueblos liberales fueron quemados, a veces con el apoyo o la tolerancia

de los gobernantes regionales, a pesar de que la mitad de los departamentos tenían gobernador liberal. En Antioquia, el gobernador conservador renunció en protesta por las acciones "sectarias" de sus copartidarios y fue reemplazado por uno menos dispuesto a controlarlos: a los pocos días el pueblo de Rionegro, emblema de fidelidad a un liberalismo decimonónico, fue quemado con ayuda de empleados, transportados en camiones de la administración departamental. En algunos sitios los liberales empezaron a proponer la formación de guerrillas y a fines de 1949 comenzaron a actuar grupos armados en los Llanos, Antioquia y el Tolima.

El problema central era el de las elecciones. Mientras duró la coalición, se hicieron esfuerzos para tener autoridades electorales más o menos imparciales. Pero desde 1947 Laureano Gómez había denunciado que los liberales tenían 1 800 000 cédulas falsas, que les permitirían votar varias veces y ganar las elecciones de 1950. Incitadas por esto, algunas autoridades conservadoras hacían redadas y confiscaban las cédulas de los liberales, identificados por los sellos que indicaban en qué elecciones habían participado: en varias de ellas, entre 1936 y 1946, los conservadores habían decretado la abstención. Los intentos de quitar las cédulas provocaban respuestas violentas y los liberales andaban a veces en pequeñas escuadras armadas. Rota la colaboración, Laureano Gómez regresó del exterior y planteó que el liberalismo colombiano era en realidad un monstruo, un basilisco de cabeza comunista y cuerpo liberal, y había que destruirlo. A los pocos días el conservatismo lo eligió candidato a la presidencia.

Las elecciones de junio de 1949 mostraron mayoría liberal pero ya reducida: en cinco departamentos ganaron los conservadores (los siempre conservadores de Antioquia, Boyacá y Norte de Santander y dos con pequeñas mayorías liberales en 1946 y 1947: Huila y Caldas) y en otros la ventaja liberal se redujo, lo que mostraba que la presión oficial tenía resultados y pronto habría mayoría conservadora.

Los asustados liberales, que todavía tenían mayoría en el Senado y la Cámara, intentaron frenar el ascenso conservador. Eligieron a Eduardo Santos como designado presidencial, trataron de reducir los poderes presidenciales y, sobre todo, proteger las elecciones.

En agosto de 1949 anticiparon la fecha de la elección presidencial para noviembre de 1949, en vez de mayo de 1950, para no dejar tiempo para una anulación masiva de las cédulas liberales, lo que sirvió para provocar más a los conservadores y demostrarles que los liberales insistían en defender el fraude. Las sesiones del Congreso entre julio y noviembre fueron caóticas y violentas, y en septiembre, después de un intercambio de insultos y en medio de pitidos, dos representantes sacaron los revólveres: un espectador, según las versiones más creíbles, disparó contra el representante liberal, que murió, así como otro congresista liberal. La segunda decisión liberal fue tratar de destituir al presidente, acusándolo de la violación de la Constitución. La idea de que en un clima tal de polarización el presidente aceptara un juicio político era ingenua y, en efecto, cuando el Congreso le informó el 9 de noviembre que lo juzgaría, el presidente mandó los soldados al Capitolio y cerró el Congreso. A partir de entonces gobernó mediante decretos de "emergencia" o de "estado de sitio", una práctica que se mantuvo hasta 1958; desde entonces hasta 1982 coexistieron un Congreso debilitado y los decretos legislativos del ejecutivo.

En muchos sitios se habían formado ya grupos armados liberales, que no contaban con respaldo claro de los dirigentes nacionales. En las dos semanas siguientes hubo nuevos enfrentamientos violentos y el 27 de noviembre, en unas elecciones sin participación liberal, pues Darío Echandía se había retirado, el conservatismo, entusiasta y triunfante, eligió presidente de Colombia a Laureano Gómez.

#### EL GOBIERNO DE LAUREANO GÓMEZ Y

ROBERTO URDANETA

Aunque Laureano Gómez anunció que su gobierno sería "nacional", pronto volvió a su proyecto, que era hacer imposible un triunfo liberal futuro, que asociaba con el comunismo y el protestantismo. Las elecciones de septiembre de 1951 para el Congreso se hicieron sin participación del liberalismo —aunque el Partido Comunista se presentó a las urnas y logró menos de 1% de los votos, y se inscri-



bieron unas listas "gaitanistas", los llamados "lentejos", que también tuvieron una votación menor a 1%—. A partir de este momento el Congreso estuvo compuesto únicamente por senadores y representantes conservadores.

Laureano Gómez, atraído por el falangismo de Francisco Franco en España, impulsó una reforma constitucional con elementos corporativos, elecciones menos frecuentes y más confiables y más autoridad presidencial. En 1952, cuando el presidente, enfermo, había sido reemplazado por Roberto Urdaneta Arbeláez, una Comisión de Estudios Constitucionales compuesta por siete conservadores elaboró un primer proyecto que proponía un Congreso elegido por empresarios y otros organismos, y en diciembre el Congreso convocó una Asamblea Nacional Constituyente, con 52 miembros, 35 conservadores y siete liberales, escogidos por las autoridades, además de diez delegados de las asociaciones empresariales.

Los factores que estimulaban la violencia seguían presentes y la desconfianza entre liberales y conservadores era cada día mayor. El liberalismo se dividió con respecto a la relación que debía tener con el gobierno. Alfonso López y Eduardo Santos eran partidarios de buscar un acuerdo con el gobierno conservador que frenara la violencia, pero la mayoría de los jefes se oponía a todo acuerdo con un gobierno que consideraban ilegítimo. La convención liberal de junio de 1951 mantuvo la política de abstención electoral y de "oposición civil": los principales dirigentes se oponían a apoyar la guerrilla, y en particular Eduardo Santos creía que las armas sólo llevarían a endurecer al gobierno y producir nuevas represalias. López estuvo de acuerdo en que no se les diera apoyo, lo que se reforzó en octubre, cuando el directorio liberal condenó las guerrillas y pidió, en frase atribuida a Carlos Lleras Restrepo, el "desarme de los espíritus". Alfonso López, con autorización del gobierno, que buscó en varias ocasiones un acuerdo con la guerrilla que llevara a su desarme, se entrevistó con algunos jefes guerrilleros sin ningún resultado.

Sin embargo, las guerrillas seguían aumentando: en los Llanos Orientales, dirigidas por Guadalupe Salcedo y con el apoyo de muchos de los grandes terratenientes liberales, contaban con 2 000 o 3 000 hombres armados, que combinaban sus trabajos rurales con

ocasionales acciones militares. En Antioquia eran también numerosas. Así, sin apoyo oficial liberal, crecían como respuesta a lo que veían como una persecución implacable de un régimen ilegítimo. Algunos abogados y dirigentes se sumaron a ellas y con su ayuda las conferencias o encuentros de jefes guerrilleros expidieron dos “leyes del llano”, para darles un ideario más preciso. Estas guerrillas no parecían debilitarse, sino crecer, en respuesta a la acción militar del gobierno, que tomó formas cada vez más violentas: tras el secuestro de algunos notables conservadores y liberales en Líbano, el ejército lanzó una ofensiva en la que murieron más de mil personas, la mayoría ajenas a lo ocurrido. Esta estrategia aumentaba la disposición de los liberales locales de unirse a la guerrilla, a veces para defenderse, y promovía su crecimiento. Logró dar algunos golpes notables, como el ataque a la base militar de Puerto López o el ataque a la base militar de Palanquero en diciembre de 1952.

Frente a los actos armados, los conservadores sentían que tenían derecho a responder en forma similar. Así, en septiembre de 1952, después del entierro de unos soldados muertos por la guerrilla, grupos conservadores, con apoyo o al menos tolerancia de las autoridades de Bogotá, quemaron las casas de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, así como los edificios de *El Tiempo* y *El Espectador*. En el campo se armaron grupos de civiles conservadores para apoyar al ejército, por ejemplo para conservar el orden cuando éste abandonara una zona ya dominada. Estas contraguerrillas, conocidas en algunos sitios como *pájaros*, aumentaron la violencia, pues se convirtieron en instrumento de venganzas políticas o se aprovecharon para apropiarse de fincas y ganados de los perseguidos.

El Partido Comunista había decidido responder a la “violencia” de los “bandidos falangistas” del gobierno con la “violencia organizada de las masas”, aunque mantenía que lo fundamental era la organización y “la resistencia de las amplias masas” y no la lucha armada y, por ello, a pesar del ambiente violento, participó en las elecciones de 1951. El VII Congreso del PC respaldó, en 1952, a los grupos armados comunistas que se habían formado desde 1950, dándoles el nombre de “autodefensas campesinas”. Sin embargo, la idea era que estos grupos sirvieran para resistir la represión y el Partido Comunista condenaba por aventureros a los que creían que podían lle-

de los gobernantes regionales, a pesar de que la mitad de los departamentos tenían gobernador liberal. En Antioquia, el gobernador conservador renunció en protesta por las acciones "sectarias" de sus copartidarios y fue reemplazado por uno menos dispuesto a controlarlos: a los pocos días el pueblo de Rionegro, emblema de fidelidad a un liberalismo decimonónico, fue quemado con ayuda de empleados, transportados en camiones de la administración departamental. En algunos sitios los liberales empezaron a proponer la formación de guerrillas y a fines de 1949 comenzaron a actuar grupos armados en los Llanos, Antioquia y el Tolima.

El problema central era el de las elecciones. Mientras duró la coalición, se hicieron esfuerzos para tener autoridades electorales más o menos imparciales. Pero desde 1947 Laureano Gómez había denunciado que los liberales tenían 1 800 000 cédulas falsas, que les permitirían votar varias veces y ganar las elecciones de 1950. Incitadas por esto, algunas autoridades conservadoras hacían redadas y confiscaban las cédulas de los liberales, identificados por los sellos que indicaban en qué elecciones habían participado: en varias de ellas, entre 1936 y 1946, los conservadores habían decretado la abstención. Los intentos de quitar las cédulas provocaban respuestas violentas y los liberales andaban a veces en pequeñas escuadras armadas. Rota la colaboración, Laureano Gómez regresó del exterior y planteó que el liberalismo colombiano era en realidad un monstruo, un basilisco de cabeza comunista y cuerpo liberal, y había que destruirlo. A los pocos días el conservatismo lo eligió candidato a la presidencia.

Las elecciones de junio de 1949 mostraron mayoría liberal pero ya reducida: en cinco departamentos ganaron los conservadores (los siempre conservadores de Antioquia, Boyacá y Norte de Santander y dos con pequeñas mayorías liberales en 1946 y 1947: Huila y Caldas) y en otros la ventaja liberal se redujo, lo que mostraba que la presión oficial tenía resultados y pronto habría mayoría conservadora.

Los asustados liberales, que todavía tenían mayoría en el Senado y la Cámara, intentaron frenar el ascenso conservador. Eligieron a Eduardo Santos como designado presidencial, trataron de reducir los poderes presidenciales y, sobre todo, proteger las elecciones.

En agosto de 1949 anticiparon la fecha de la elección presidencial para noviembre de 1949, en vez de mayo de 1950, para no dejar tiempo para una anulación masiva de las cédulas liberales, lo que sirvió para provocar más a los conservadores y demostrarles que los liberales insistían en defender el fraude. Las sesiones del Congreso entre julio y noviembre fueron caóticas y violentas, y en septiembre, después de un intercambio de insultos y en medio de pitidos, los representantes sacaron los revólveres: un espectador, según las versiones más creíbles, disparó contra el representante liberal, que murió, así como otro congresista liberal. La segunda decisión liberal fue tratar de destituir al presidente, acusándolo de la violación de la Constitución. La idea de que en un clima tal de polarización el presidente aceptara un juicio político era ingenua y, en efecto, cuando el Congreso le informó el 9 de noviembre que lo juzgaría, el presidente mandó los soldados al Capitolio y cerró el Congreso. A partir de entonces gobernó mediante decretos de "emergencia" o de "estado de sitio", una práctica que se mantuvo hasta 1958; desde entonces hasta 1982 coexistieron un Congreso debilitado y los decretos legislativos del ejecutivo.

En muchos sitios se habían formado ya grupos armados liberales, que no contaban con respaldo claro de los dirigentes nacionales. En las dos semanas siguientes hubo nuevos enfrentamientos violentos y el 27 de noviembre, en unas elecciones sin participación liberal, pues Darío Echandía se había retirado, el conservatismo, entusiasta y triunfante, eligió presidente de Colombia a Laureano Gómez.

#### EL GOBIERNO DE LAUREANO GÓMEZ Y ROBERTO URDANETA

Aunque Laureano Gómez anunció que su gobierno sería "nacional", pronto volvió a su proyecto, que era hacer imposible un triunfo liberal futuro, que asociaba con el comunismo y el protestantismo. Las elecciones de septiembre de 1951 para el Congreso se hicieron sin participación del liberalismo —aunque el Partido Comunista se presentó a las urnas y logró menos de 1% de los votos, y se inscri-

bieron unas listas "gaitanistas", los llamados "lentejos", que también tuvieron una votación menor a 1%—. A partir de este momento el Congreso estuvo compuesto únicamente por senadores y representantes conservadores.

Laureano Gómez, atraído por el falangismo de Francisco Franco en España, impulsó una reforma constitucional con elementos corporativos, elecciones menos frecuentes y más confiables y más autoridad presidencial. En 1952, cuando el presidente, enfermo, había sido reemplazado por Roberto Urdaneta Arbeláez, una Comisión de Estudios Constitucionales compuesta por siete conservadores elaboró un primer proyecto que proponía un Congreso elegido por empresarios y otros organismos, y en diciembre el Congreso convocó una Asamblea Nacional Constituyente, con 52 miembros, 35 conservadores y siete liberales, escogidos por las autoridades, además de diez delegados de las asociaciones empresariales.

Los factores que estimulaban la violencia seguían presentes y la desconfianza entre liberales y conservadores era cada día mayor. El liberalismo se dividió con respecto a la relación que debía tener con el gobierno. Alfonso López y Eduardo Santos eran partidarios de buscar un acuerdo con el gobierno conservador que frenara la violencia, pero la mayoría de los jefes se oponía a todo acuerdo con un gobierno que consideraban ilegítimo. La convención liberal de junio de 1951 mantuvo la política de abstención electoral y de "oposición civil": los principales dirigentes se oponían a apoyar la guerrilla, y en particular Eduardo Santos creía que las armas sólo llevarían a endurecer al gobierno y producir nuevas represalias. López estuvo de acuerdo en que no se les diera apoyo, lo que se reforzó en octubre, cuando el directorio liberal condenó las guerrillas y pidió, en frase atribuida a Carlos Lleras Restrepo, el "desarme de los espíritus". Alfonso López, con autorización del gobierno, que buscó en varias ocasiones un acuerdo con la guerrilla que llevara a su desarme, se entrevistó con algunos jefes guerrilleros sin ningún resultado.

Sin embargo, las guerrillas seguían aumentando: en los Llanos Orientales, dirigidas por Guadalupe Salcedo y con el apoyo de muchos de los grandes terratenientes liberales, contaban con 2 000 o 3 000 hombres armados, que combinaban sus trabajos rurales con

ocasionales acciones militares. En Antioquia eran también numerosas. Así, sin apoyo oficial liberal, crecían como respuesta a lo que veían como una persecución implacable de un régimen ilegítimo. Algunos abogados y dirigentes se sumaron a ellas y con su ayuda las conferencias o encuentros de jefes guerrilleros expidieron dos “leyes del llano”, para darles un ideario más preciso. Estas guerrillas no parecían debilitarse, sino crecer, en respuesta a la acción militar del gobierno, que tomó formas cada vez más violentas: tras el secuestro de algunos notables conservadores y liberales en Líbano, el ejército lanzó una ofensiva en la que murieron más de mil personas, la mayoría ajenas a lo ocurrido. Esta estrategia aumentaba la disposición de los liberales locales de unirse a la guerrilla, a veces para defenderse, y promovía su crecimiento. Logró dar algunos golpes notables, como el ataque a la base militar de Puerto López o el ataque a la base militar de Palanquero en diciembre de 1952.

Frente a los actos armados, los conservadores sentían que tenían derecho a responder en forma similar. Así, en septiembre de 1952, después del entierro de unos soldados muertos por la guerrilla, grupos conservadores, con apoyo o al menos tolerancia de las autoridades de Bogotá, quemaron las casas de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, así como los edificios de *El Tiempo* y *El Espectador*. En el campo se armaron grupos de civiles conservadores para apoyar al ejército, por ejemplo para conservar el orden cuando éste abandonara una zona ya dominada. Estas contraguerrillas, conocidas en algunos sitios como *pájaros*, aumentaron la violencia, pues se convirtieron en instrumento de venganzas políticas o se aprovecharon para apropiarse de fincas y ganados de los perseguidos.

El Partido Comunista había decidido responder a la “violencia” de los “bandidos falangistas” del gobierno con la “violencia organizada de las masas”, aunque mantenía que lo fundamental era la organización y “la resistencia de las amplias masas” y no la lucha armada y, por ello, a pesar del ambiente violento, participó en las elecciones de 1951. El VII Congreso del pc respaldó, en 1952, a los grupos armados comunistas que se habían formado desde 1950, dándoles el nombre de “autodefensas campesinas”. Sin embargo, la idea era que estos grupos sirvieran para resistir la represión y el Partido Comunista condenaba por aventureros a los que creían que podían lle-

var a que los revolucionarios tomaran el poder. Las dos principales guerrillas comunistas estaban en el sur y el oriente del Tolima y en Sumapaz y Tequendama, en Cundinamarca, donde el campesinado tenía una tradición de organización de más de 30 años.

El gobierno, por su parte, no logró mantener la unidad. Al enfermarse Gómez en 1951, la selección de Roberto Urdaneta Arbeláez como su reemplazo distanció a Gilberto Alzate Avendaño, el más influyente de los parlamentarios conservadores. Al mismo tiempo, los dirigentes de Antioquia y los sectores moderados del conservatismo seguían inclinándose por acuerdos con los liberales, para reducir la tensión y la violencia. Estos grupos, apoyados por empresarios industriales y cafeteros, responsabilizaban de la tensa situación a la intransigencia de Gómez y a su espíritu de cruzada y, en abril de 1952, proclamaron la candidatura de Mariano Ospina Pérez, quien la aceptó en un discurso crítico del gobierno. Gómez, aunque ya no ejercía la presidencia, contestó con un mensaje ridiculizando a Ospina y, a partir de este momento, insistió en su cruzada total contra el liberalismo, que venía corrompiendo a Colombia con sus ideas desde 1821.

Esta radicalización de Gómez le fue quitando el respaldo mayoritario del conservatismo, y fueron los grupos ospinistas y alzatistas los que, hacia mayo de 1953, comenzaron a buscar en los militares apoyo contra su temido regreso a la presidencia. Encontraron un aliado en el comandante del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, que había sido ministro de Ospina. Gómez, temeroso de esta alianza, trató de alejar a Rojas del país para nombrar otro comandante, pero lo único que logró fue inquietarlo. Cuando Gómez ordenó que lo destituyeran, aprovechando que los subordinados del general habían sentido sobre hielo a un industrial de Medellín, sospechoso de conspirar contra él, el presidente en ejercicio, Urdaneta, se negó a hacerlo, y el 13 de junio Gómez reasumió el poder. Pero Rojas, con el apoyo de los alzatistas y de otros generales, reaccionó a su destitución, decretada en el primer Consejo de Ministros organizado por Gómez, y movilizó las tropas para rodear la casa de Gómez y tomar el poder.

Allí pidió a Urdaneta y a Ospina que asumieran la presidencia, a lo que se negaron, pues no querían cuestionar la legitimidad que reconocían al gobierno de Gómez. Ante esto, y como "la nación no

puede quedarse sin gobierno" y no se sabía dónde estaba Gómez, Rojas asumió el poder. Era el primer golpe militar desde 1854, casi cien años después y, como entonces, el jefe del ejército, al que se intentaba destituir, quiso que el presidente en ejercicio (Obando en 1854, Urdaneta en 1953) pusiera la cara, pero entregando el poder real a los militares.

Por la noche Rojas anunció por radio su posesión, en un discurso en el que se presentó como ángel de paz: "No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político [...] Paz, derecho, libertad, justicia para todos [...] y de manera especial para las clases menos favorecidas de la fortuna, para los obreros y meneserosos. La patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre o desnudos". En este momento la retórica de la paz llegaba a los colombianos: si la violencia resultaba del enfrentamiento de los partidos, el ejército, que en principio no estaba ligado a ellos, podía garantizar la paz.

#### LA DICTADURA MILITAR

Para dar legitimidad al golpe de Estado, el nuevo presidente lo planteó como respuesta a la situación de violencia a la que los políticos habían llevado al país. Su discurso fue acogido con entusiasmo: aunque la violencia no afectaba mucho las ciudades, era el rasgo más fuerte de la vida nacional, y casi todos tenían conocidos o familiares entre víctimas o atacantes. Los primeros anuncios confirmaron la buena impresión inicial: decretó una amnistía general, que incluía a las guerrillas liberales, pero también a los grupos armados civiles conservadores y a los militares que se hubieran extralimitado al defender el orden. Anunció además que haría un gobierno "nacional", pero pronto mostró que quería mantener un proyecto conservador. Lucio Pabón Núñez, que había sido ministro en el gobierno anterior y había promovido la declaratoria, en 1952, de que Colombia era una nación "bolivariana", siguió en el mismo cargo y se convirtió en el ideólogo principal de Rojas. Creía tanto como Gómez en la necesidad de erradicar el peligro comunista, encarnado en parte en el liberalismo y en la democracia. A él se debe el bolivarismo de Rojas,



que trató de arroparse en las imágenes de Bolívar y Cristo, y llenó el gobierno de ideólogos conservadores.

Para dar base "legal" a su gobierno, Rojas se apoyó en la Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, convocada por el gobierno de Gómez y Urdaneta. Ésta se reunió en los días siguientes al golpe y mostró que los jefes conservadores respaldaban a Rojas: el 18 de junio decidió que la presidencia había quedado vacante el 13 de junio y que el general tenía título legítimo para completar el periodo constitucional, hasta agosto de 1954. Para dar a Rojas mayor influencia en la Asamblea, autorizó el nombramiento de 38 diputados adicionales escogidos por él; además, asumió las funciones legislativas, de manera que el Congreso no se volvió a reunir. El presidente nombró a 22 liberales que aceptaron sus cargos contra las directivas de su partido y fueron calificados como "lentejos". Los demás liberales, a pesar de que no participaron en la Asamblea ni aceptaron colaborar en el gobierno, lo veían como una mejora tan clara sobre el anterior que le dieron su apoyo político y aceptaron, en noviembre, el nombramiento, para responder a la renuncia de la Corte Suprema, de una Corte Paritaria, en la cual estuvieron dirigentes liberales notables como Darío Echandía. Nadie pareció incomodarse porque el nombramiento lo hiciera el presidente, cuando la Constitución atribuía esta función al Congreso. También anunció, sin mayor oposición, que propondría a la ANAC que la Corte fuera nombrada en adelante por el presidente, para que no fuera elegida con criterios políticos, como los que dominaban en el Congreso. Esta asamblea, reunida en agosto de 1954, se apresuró a prorrogar por cuatro años el mandato de Rojas, hasta 1958, y a aprobar las dos propuestas en las que insistió el presidente: dar el voto a las mujeres y declarar ilegal al Partido Comunista.

Así, aunque el Partido Comunista dio un apoyo tímido al golpe militar, el gobierno subrayó su anticomunismo y reanudó la guerra contra los sitios donde había guerrillas de influencia comunista, relativamente inactivas pero que no habían entregado las armas, como Sumapaz, Cunday y Villarrica. En noviembre de 1954 el ejército atacó Villarrica y en marzo y abril Cunday en operaciones muy violentas, descritas por diplomáticos como "de tierra arrasada" y que produjeron la muerte de muchos campesinos. Rojas buscó

infructuosamente, como lo había hecho Laureano Gómez, que el gobierno de Estados Unidos le vendiera bombas de napalm para combatir el comunismo. En 1955 la ofensiva a Villarrica llevó a que muchos guerrilleros pasaran la cordillera hacia los Llanos Orientales, al Ariari y la Macarena, expandiendo las bases de las guerrillas de influencia comunista. El Partido Comunista se lanzó a la oposición y dio apoyo a las guerrillas perseguidas, a pesar de que, como declaró en el XVIII Pleno del Comité Central, su ideología condenaba "el aventurerismo y "el guerrillerismo" como tendencias pequeñoburguesas que "tratan de sustituir la lucha de masas" por "la acción de pequeños grupos audaces".

Varios hechos, que mostraban el autoritarismo del gobierno, debilitaron el amplio apoyo original. La censura de prensa se aplicó con firmeza, desde que, en septiembre de 1953, el gobierno cerró *El Siglo*, periódico de Laureano Gómez. En junio de 1954, en una manifestación, murió un estudiante de la Universidad Nacional. Al día siguiente, en el centro de Bogotá, otros doce fueron asesinados cuando el ejército disparó contra ellos: según Rojas, alguien había disparado antes contra los militares. La policía detuvo pronto a los intelectuales de izquierda que pudo, como Gerardo Molina, Diego Montaña Cuellar y Antonio García aunque, como era usual, los soltó rápidamente.

La censura, manejada con arbitrariedad e incoherencia, se hizo más intensa: al *Diario Gráfico*, asociado con Laureano Gómez, le prohibieron publicar lo que tuviera que ver con el gobierno militar o con el precedente. En octubre salió un decreto sobre prensa, con penas altas y arbitrarias por "injuria y calumnia", aunque el gobierno lo suavizó en respuesta a las protestas. En noviembre de 1954 se prohibió a la radio toda información y discusión sobre política. En mayo de 1955, Rojas ordenó encarcelar a quienes publicaran noticias que atribuyeran ilegalidades a los militares y en julio cerró *El Tiempo*, cuando se negó a publicar durante 30 días como propia una rectificación redactada por Lucio Pabón Núñez. En diciembre se aplicó una multa a *El Espectador*, acusado de publicar noticias sobre la violencia y por fraude en impuestos, pero se le prohibió publicar sus explicaciones, ante lo cual el periódico dejó de aparecer. Aunque el ataque a la prensa podría provocar alguna solidaridad

de lectores irritados por la "gran prensa" y tuvo el respaldo entusiasta de los gaitanistas que publicaban *Jornada*, dañó la imagen del presidente e influyó en la rechifla a su hija en la plaza de toros La Santamaría, en febrero de 1956, a la que respondió la policía secreta en la corrida siguiente con el maltrato y asesinato de algunos espectadores.

*El Tiempo* y *El Espectador* se presentaban ya desde fines de 1954 como heroicos luchadores de la libertad contra la dictadura. *El Espectador* sirvió para poner en primera fila a Alberto Lleras Camargo, quien renunció a la secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, a fines de 1954 y regresó al país. En septiembre de 1955 habló en el homenaje a Eduardo Santos por el cierre de *El Tiempo*, lo que provocó la respuesta furiosa de Rojas. Cerrado *El Espectador* en febrero de 1956, salió *El Independiente* como su reencarnación, dirigido por Lleras, pero en abril ya había tenido que suspenderse.

Desde ese momento Lleras dirigió y coordinó la resistencia al gobierno militar, con el apoyo del Partido Liberal. En el conservatismo, el laureanismo había sido el único grupo de oposición inicial. Para 1955 muchos alzatistas se habían separado del gobierno y a mediados de 1956 los ospinistas comenzaron a pasar a la oposición, de modo que para fines de 1956 el presidente no tenía apoyo de los partidos tradicionales, aunque seguía gobernando con un equipo conservador y un puñado de liberales gaitanistas.

En 1956 Rojas, cuyo anticomunismo seguía vivo, anunció que al fin se había destruido, con los batallones que habían vuelto de Corea, la supuesta fortaleza comunista de Cunday y Villarrica. Ese año la embajada de Estados Unidos informó que el presidente ya no tenía base política, pero que los partidos no parecían inclinados a derribarlo por la fuerza. Calculaba que había unos 6 000 guerrilleros, de los cuales la mitad podía estar bajo influencia comunista. Esto mostraba que el gobierno había fracasado en su promesa de pacificar el país; y a la violencia rural, que aumentó otra vez en 1956, se sumaron arbitrariedades contra dirigentes y activistas políticos. En el Partido Liberal, aunque algunos dirigentes pensaban que debía respaldarse a los guerrilleros, la mayoría seguía oponiéndose, debido a los daños y muertes que produciría una guerra abierta y porque temían que la guerrilla justificara una respuesta

cada vez más fuerte de una dictadura que, a pesar de sus ilegalidades, se mantenía por lo general dentro de límites, borrosos pero reales, de respeto a la vida y los bienes de los ciudadanos del común: una “dictablanda”, como fue calificada por algunos de los hombres de la época.

Pero al dejar a la guerrilla sin apoyo liberal, los únicos grupos armados activos y con visión política eran los de las zonas de influencia del Partido Comunista: Sumapaz, Tequendama y el Tolima. Estos grupos estimulaban los enfrentamientos de clase en el campo, promovían la protesta de campesinos, aparceros o colonos por los abusos de los propietarios, acompañadas de chantajes y extorsiones (“impuestos”) de la guerrilla, y ayudaron a formar un campesinado con conciencia de clase más definida. La violenta respuesta del gobierno terminó confirmando la convicción de los campesinos de estos sitios de que sólo las armas los defenderían de las arbitrariedades oficiales. Del mismo modo, dejó en el Partido Comunista un amplio grupo de simpatizantes de la lucha guerrillera, enfrentados a quienes trataban de impulsar ante todo la “organización popular” y las luchas legales. La tensión entre estas dos tendencias y los esfuerzos dialécticos para hacerlos compatibles condujeron finalmente, en 1961, a la adopción de la teoría de la “combinación de todas las formas de lucha”, que parecía resolver el dilema.

Para conseguir apoyo, el gobierno tomó algunas medidas que podían presentarse como orientadas a beneficiar al pueblo: creó el Banco Central Hipotecario, el INA (Instituto Nacional de Abastecimientos), que importaba alimentos cuando subían de precio, y el SENDAS (Servicio Nacional de Asistencia Social), que repartía pequeños beneficios a las clientelas populares del régimen. Al mismo tiempo, hizo varios ensayos de crear un movimiento político diferente a los dos viejos partidos, el MAN (Movimiento Amplio Nacional) o la Tercera Fuerza. Aunque entre los asesores del gobierno había gaitanistas notables, el control seguía en manos de los antiguos conservadores. Un buen síntoma de lo difícil que era apoyar al general desde una perspectiva popular y de izquierda lo dio un discurso del dirigente gaitanista Jorge Villaveces, que consideró que Rojas y Gaitán eran casi iguales, por su bolivarismo, por el catolicismo del general y las ideas de Cristo adoptadas por Gaitán y, sobre

todo, porque ambos estaban de acuerdo en que había que eliminar al comunismo de Colombia.

El gobierno militar, además, enfrentó un cambio en las condiciones económicas. El elevado precio del café acompañó el rápido crecimiento de la economía entre 1948 y 1955. Ante los altos precios de 1954, el gobierno liberó las importaciones y el comercio de oro y en 1955 creó un mercado paralelo para el dólar. El auge importador, estimulado por un dólar oficial barato, llevó a un crecimiento inmenso de la deuda externa y a una crisis de la balanza de pagos. Aunque los precios del café no bajaron, dejaron de crecer desde 1956, mientras aumentaba la producción. El dólar paralelo se disparó: a fines de 1956 valía el doble del oficial y en abril de 1957 casi tres veces más. A pesar de que el gobierno trató de evitar la crisis del comercio externo y garantizar los pagos, la economía se frenó en seco en 1956 y 1957, los precios internos subieron (impulsados en parte por el aumento en las emisiones de dinero para financiar al gobierno) y la corrupción y la especulación aumentaron. Como el gobierno no pudo evitar un amplio déficit en 1955 y 1956 y hubo una reducción del gasto público en 1957, los indicadores económicos se pusieron, como es usual en estos casos, contra el gobierno, que no había sabido aprovechar la bonanza.

En 1956 el gobierno siguió perdiendo apoyo entre los grupos políticos y empresariales y enfrentó críticas más fuertes de los medios de comunicación, a pesar de la censura. Los liberales, encabezados por Alberto Lleras, habían perdido confianza en él y querían volver a un gobierno electivo, civil y sin una policía persecutoria, corrupta y arbitraria; los conservadores estaban divididos entre rojistas, ospinistas y laureanistas: sólo los primeros le daban apoyo irrestricto al presidente mientras los laureanistas seguían en oposición total. Rojas dudó entre seguir, como hasta entonces, con una línea conservadora y anticomunista o adoptar una estrategia "populista" que atrajera a obreros y sectores similares, promovida por algunos gaitanistas y socialistas que pensaban que podría haber una revolución desde arriba. Pero esto lo habría enfrentado a sus principales fuentes de respaldo: el ejército y la burocracia conservadora. En junio de 1956 creó la Tercera Fuerza, que buscaba formar un

nuevo partido y una nueva central obrera. Esto provocó el rechazo de la Iglesia católica, que hasta entonces lo había respaldado, sobre todo por su anticomunismo, y que temía que fuera a arrebatárle el control de la mayor federación sindical, la Unión de Trabajadores de Colombia.

Frente a un gobierno sin apoyo y que debía definir la sucesión antes de 1958, los dirigentes tradicionales sintieron que había llegado la oportunidad para regresar a la democracia. En agosto de 1956 el rechazo a Rojas unió a los viejos enemigos: Alberto Lleras y Laureano Gómez, que estaba exiliado en España, hicieron una declaración conjunta, el Pacto de Benidorm, en el que decían que ante el abismo social, la corrupción y la destrucción de la democracia, había que reconstruir la república y devolver el poder a sus fuentes populares con un gobierno de coalición.

El general Rojas convocó, en octubre de 1956, a una nueva reunión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) y anunció que si no aprobaba lo que iba a proponer, la disolvería. A las primeras reuniones asistieron Alberto Lleras y Álvaro Gómez Hurtado, que hablaron contra el proyecto oficial de ampliar la Asamblea para garantizar la mayoría rojista, que fue aprobado, aunque el conservatismo ospinista se sumó a la oposición.

La ANAC, en la que había una minoría opositora fuerte, se reunió en marzo de 1957 y buscó dar todo el poder al rojismo. Para ello decretó su disolución y su reemplazo por una nueva Asamblea Constituyente, de 90 miembros, la tercera parte de ellos nombrados por el presidente y los otros 60 por juntas locales escogidas por la Asamblea que se cerraba, un mecanismo que garantizaba que todos los delegados fueran amigos del gobierno.

Estas maniobras buscaban elegir a Rojas para el periodo presidencial de 1958 a 1962, pero eran incongruentes con el hecho de que el gobierno ya no contaba sino con el apoyo de las burocracias militares y civiles, de funcionarios conservadores y unos pocos políticos socialistas, sin impacto popular. Gremios empresariales, periodistas e intelectuales lo habían abandonado casi por completo, así como los jefes del liberalismo, el conservatismo y el comunismo y los dirigentes obreros y populares, de centro y de izquierda. A fines de 1956 el ospinismo pasó a la oposición y lanzó la candidatura

presidencial de Guillermo León Valencia, aunque nadie sabía si el gobierno permitiría elecciones en 1958.

Como la enemistad entre los dos sectores conservadores parecía insoluble, Lleras promovió una declaración conjunta con los ospinistas, el 20 de marzo de 1957, en la que el liberalismo se comprometió a votar por un candidato conservador a la presidencia. En abril se reunió la nueva Asamblea Constituyente para reelegir al general, que ya no tenía casi ningún respaldo. El cardenal Ismael Perdomo le escribió diciendo que la reelección sería ilegal. Aunque algunos ciudadanos podían simpatizar con Rojas, por sus gestos hacia las mujeres (nombró una ministra y apoyó la reforma constitucional que les daba el voto, aunque esto sonaba hueco en un régimen que nunca convocó a elecciones) y por algunos programas sociales, no muy efectivos, esta simpatía no se mostraba en organizaciones o actos políticos, y el discurso que invocaba al “pueblo” contra las oligarquías, que había penetrado las mentalidades urbanas desde hacía unos 30 años, no sonaba convincente en un gobierno amigo de los terratenientes, represivo y militarista, y que se enfrentó poco con los oligarcas.

En el gobierno la crisis era evidente. Los militares empezaron a rechazar la reelección y el ideólogo conservador y bolivariano, el ministro de Gobierno Lucio Pabón Núñez, renunció a comienzos de mayo y se fue del país. Los servicios secretos apresaron al candidato Valencia, aunque ante el rechazo general lo soltaron rápidamente. El 6 de mayo, empresarios, sindicatos obreros y dirigentes de los partidos comenzaron de común acuerdo un “paro cívico” nacional, con visible participación de los estudiantes universitarios. Cerraron industrias, bancos y almacenes y hasta los periódicos dejaron de aparecer.

El gobierno no tenía ninguna respuesta preparada, lo que fue aprovechado por el gaitanista Antonio García para proponer una revolución “socialista” a los militares: nacionalizar los bancos y las empresas que no abrieran al público. Eran sueños sin peso —el ejército y el gobierno, orientado por conservadores, no se enfrentarían a la Iglesia y a los empresarios con gestos de aire comunista— y nadie los tomó en serio. El 8 de mayo la ANAC, en reuniones casi clandestinas, reeligió a Rojas por cuatro años más. Como los demás

periódicos no circulaban, *El Catolicismo*, órgano de la Iglesia, apareció para declarar ilegítima la reelección por una constituyente nombrada por el presidente; algunos obispos pedían la excomunión de los agentes del gobierno que habían entrado a las iglesias a golpear a los fieles cuando los curas hacían arengas por la democracia. Sólo el obispo de Santa Rosa, Miguel Ángel Builes, seguía considerando a Rojas el adalid católico contra el comunismo y pedía su reelección.

Los jefes militares presionaron a Rojas y éste, después de una leve resistencia, renunció y el 10 de mayo de 1957 anunció que abandonaba el poder y saldría del país: nombró, para su reemplazo transitorio, mientras se convocaba a la nación, a una junta compuesta por cinco generales. Las masas se lanzaron a las calles a celebrar la caída del "dictador", que había sido un gobernante autoritario e ilegítimo pero no había tenido ni la voluntad ni el respaldo militar para establecer una dictadura integral, y en algunas ciudades fueron atacados y murieron detectives y miembros de los servicios secretos, odiados por su violencia. Como había ocurrido en 1854 y en 1909, la alianza entre los dirigentes políticos de los dos partidos les permitió enfrentar, con apoyo de sectores empresariales y de una opinión pública casi unánime, a los dictadores y presidentes que intentaron fundar el poder en el ejército. Y como entonces, el dictador prefirió renunciar y salir del país a enfrentarse a una nación que parecía unánime en su rechazo.